DOCUMENTO POLÍTICO Y ORGANIZATIVO

XI ASAMBLEA FEDERAL

Madrid, 4 y 5 de junio de 2016

INTRODUCCIÓN

El Consejo Político Federal que convocó esta XI Asamblea, la calificó de "*una asamblea excepcional ante una situación excepcional. Una asamblea que sea no el punto final sino el principio de algo más grande. Una asamblea para estar a la altura del momento político*". La excepcionalidad del momento es política pero también afecta a todos los ámbitos de la vida social en España, en Europa y en el mundo.

Vivimos momentos de cambio acelerado en el orden tecnológico y científico. Los cambios en el ámbito de la información, las comunicaciones, las energías limpias, la robótica, los nuevos materiales, la medicina, etc. están acarreando cambios progresivamente acelerados en la relación de los seres humanos entre sí y con su entorno. Nunca como hasta ahora habíamos dispuesto de herramientas tan potentes para poder garantizar nuestro bienestar material y dedicar una parte importante de nuestro tiempo a crecer cultural e intelectualmente tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Sin embargo, y paradójicamente, la percepción mayoritaria es que esto no es así: el siglo XXI nos sitúa ante enormes problemas e incertidumbres que tienen que ver con las crecientes desigualdades sociales, la pobreza, la escasa calidad democrática, el poder creciente de las grandes corporaciones económicas, el deterioro del medioambiente, el cambio climático, la escasa calidad de vida, la violencia machista y xenófoba, la tragedia de los refugiados y la lacra permanente de la guerra.

La clave de esta paradoja es sencilla: el sistema capitalista, su organización económica y su armazón jurídico-político, pivota exclusivamente en torno a la maximización del beneficio económico individual y, a partir de ahí, provoca la concentración progresiva del poder económico y político, el perjuicio de los intereses de la mayoría y, también, el de intereses colectivos como la preservación del medioambiente.

En Europa, referente mundial del capitalismo "*de rostro humano*", la globalización y los cambios en la situación internacional de los últimos decenios están haciendo saltar los cerrojos del Estado Social y sumiendo a nuestro continente en una nueva situación caracterizada por la precariedad, la incertidumbre y la pérdida del control democrático sobre las grandes decisiones que nos afectan. Esta situación se ha reflejado en el ámbito político polarizando las posiciones e incrementando el interés por la política.

Sin embargo, la mayoría de los países europeos han reaccionado frente a las nuevas realidades implementando mecanismos reaccionarios: "grandes coaliciones" entre partidos conservadores y socialdemócratas, aumento de la xenofobia y crecimiento electoral de la extrema derecha. Las experiencias típicamente socialdemócratas están derivando hacia lo de siempre: desmoralización de la izquierda social, gestión neoliberal de la economía y fracaso en la lucha contra la desigualdad mezclado con algunos toques de modernización y "sensibilidad" social.

En cuanto a España, el mal resultado del PSOE se ha producido en beneficio de formaciones políticas situadas más a su izquierda, pero este dato positivo no debe hacernos olvidar otro dato particularmente negativo: que, a pesar de venir de una durísima etapa de gobierno gestionada por un partido

tan conservador como corrupto, los resultados del 20-D han arrojado un resultado ambiguo y bastante parejo en la divisoria derecha/izquierda tanto en votos como en representación institucional (excepto en el Senado donde, a causa del sistema mayoritario, el peso conservador es muy mayoritario).

Este es el difícil panorama en el que esta XI Asamblea debe afrontar la nueva singladura de Izquierda Unida y nos equivocaríamos mucho si pretendiéramos solucionar nuestros problemas ignorando este escenario global y dando únicamente respuesta a cuestiones de corto alcance.

Más aún, para que esta Asamblea acierte es necesario que extienda su mirada no sólo en el espacio sino también en el tiempo. 2016 es el año del XXX aniversario de la constitución de Izquierda Unida y, por tanto, parece obligado que aprovechemos esta asamblea no sólo para definir nuestra estrategia política y nuestra manera de trabajar en los próximos años sino también para hacer un balance general de nuestra trayectoria, de nuestros éxitos y de nuestras limitaciones.

A lo largo de nuestra historia, y con ese compromiso político por bandera hemos logrado importantes éxitos pero también hemos sufrido algunas derrotas. En todo caso, tras treinta años de existencia es evidente que hay importantes cambios que abordar; aspectos relevantes de nuestra organización que tenemos que adaptar para que las clases populares veamos a IU como un instrumento útil para mejorar nuestras vidas. Abordar esos cambios desde la audacia y la coherencia política es el objetivo que nos marcamos en esta XI Asamblea.

Queremos poner en valor que hemos estado en la protesta y en la propuesta. No ha habido movilización obrera y popular en la que IU no haya estado presente. Desde las Huelgas Generales, en las Marchas por la Dignidad y en las mareas hasta la solidaridad con los trabajadores autónomos de Movistar, en la lucha de los trabajadores de Coca Cola, en el cierre de Elcogás, con los 8 de Airbus, o en las movilizaciones contra la política de refugiados de la UE, por citar ejemplos. En el caso de nuestros cargos públicos, en la vanguardia de la solidaridad. Y lo hemos hecho en el nivel local, en el de Federación o en el Federal. No hay excepción en ninguna movilización significativa y hay miles de ejemplos personales de participación activa y protagonista. Queremos reivindicar que este es el principal activo de IU.

Hemos sido y debemos ser una fuerza municipalista. El trabajo del conjunto de nuestros cargos públicos es uno de los valores determinantes de la organización. Ahí radica una de las vías principales del contacto con los problemas de la ciudadanía, lejos de cualquier burocratismo. No hay otra fuerza con ese bagaje.

Nuestra IU, mil veces enterrada por los grandes grupos mediáticos y atacada desde muy diversos ángulos, se ha acreditado como una fuerza sólida y que descansa sobre tres grandes pilares: su bagaje ideológico, su estructura organizativa y el trabajo de su militancia. Al mismo tiempo, IU ha dado muestras en repetidas ocasiones de una extraordinaria lucidez a la hora de analizar la realidad. Supimos hacerlo hace décadas con el modelo de construcción europea que otros vendían como el mejor de los mundos y lo hemos hecho más recientemente, con la crisis social, los efectos de las políticas de recortes, el desgaste del bipartidismo y la crisis política e institucional… Sin embargo, no hemos sido capaces de canalizar de manera satisfactoria la frustración social creciente.

Que surgiera otro partido al socaire de esta incapacidad y nos arrebatara un tercio de nuestro electorado es lo de menos: la gran pregunta que nos debemos hacer es si, a partir de ahora, vamos a tener el coraje político e intelectual para superar nuestras limitaciones y conseguir los objetivos estratégicos que llevamos defendiendo desde hace treinta años.

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, la solución no vendrá de debates nominalistas, personalistas, emocionales o interiorizados, fuera quien fuera el vencedor de dichos debates. La respuesta vendrá de un análisis correcto de las nuevas realidades y de la adopción de decisiones correctas que nos permitan afrontar con éxito retos como los siguientes:

- Romper las limitaciones de nuestra propia organización y las que, en mayor o menor medida, caracterizan a las fuerzas europeas que se reclaman de nuestro mismo espacio político con el fin de desplegar nuestro proyecto político socialista, feminista y ecologista.
- Conseguir una organización tan sólida como la que tenemos pero mucho más extensa, más activa y más presente en el día a día de las clases populares y en el conflicto social.
- Hacer avanzar nuestros valores y nuestras propuestas en el terreno de la hegemonía política y cultural.
- Generar mayor confianza en las clases populares adecuando nuestro discurso y nuestra práctica política y comunicativa.
- Dar respuesta ideológica desde el ecologismo, el feminismo, el republicanismo, la memoria histórica y las nuevas relaciones capital/trabajo, entre otros, a los retos que enfrenta nuestra sociedad.

Afrontar con éxito estos retos y responder a las necesidades de la ciudadanía es el eje principal sobre el que debe pivotar esta XI Asamblea.

DIAGNÓSTICO: CRISIS DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL

Nuestro país continúa padeciendo la grave crisis económica que se desencadenó tras la crisis financiera internacional de 2007-08. La crisis financiera era la punta del iceberg de la decadencia de un sistema económico internacional que ya se ha mostrado incapaz de un crecimiento sano. Esta crisis económica es consecuencia de factores externos, como es el estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos, y también de factores internos, como la burbuja inmobiliaria de España y el modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. Pero la presente crisis es, ante todo, una crisis del *régimen de acumulación neoliberal* que ha regido en las economías desarrolladas durante las últimas décadas.

Este régimen de acumulación neoliberal ha ido sustituyendo progresivamente, desde la década de los setenta y ochenta, al sistema de acumulación fordista que había caracterizado a las economías occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las implicaciones de este fenómeno son extraordinarias, y no se puede entender la actual cartografía de nuestras sociedades sin atender al tipo de cambios que han acompañado la transición entre estos regímenes de acumulación.

Y es que estas transformaciones han modificado la estructura de clase de los países occidentales, también en España. Se han hecho dominantes nuevas formas de producción flexible, basadas en sistemas de externalización y de utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; las relaciones laborales se han precarizado; se ha producido una desindustrialización general de las economías y con deslocalizaciones hacia países con mano de obra más barata; además, existe una mucho más dura competición salarial a la baja. En suma, se ha extendido el tipo de trabajo flexible, mal pagado y precario, debido también a las nuevas y laxas normativas en materia de derecho laboral.

No obstante, el neoliberalismo, como proyecto económico e ideológico, está tratando de resolver la presente crisis mediante las mismas políticas que han dominado en las últimas décadas. Los llamados planes de ajuste o reformas estructurales buscan una nueva configuración institucional que permita mejorar aún más las expectativas del capital. La desregulación de los mercados, el incremento en la explotación laboral y las privatizaciones son asimismo parte del desmantelamiento de los mecanismos sociales que aún siguen en pie en algunos Estados.

Estas medidas, aplicadas de forma indiscriminada por los gobiernos de toda Europa, tanto socialdemócratas como liberales, han supuesto un brutal empeoramiento de las condiciones materiales de vida de las clases populares. En términos de desempleo, falta de acceso a una vivienda, precariedad, privaciones fundamentales, desigualdad y pobreza en general la situación de nuestro país no hace sino empeorar cada año. Vivimos en un escenario de emergencia social que alcanza cada vez a más amplios sectores sociales.

El panorama resultante es de relativa bonanza macroeconómica y claro malestar microeconómico, puesto que las políticas neoliberales promueven un grado muy alto de desigualdad. Transitamos hacia un modelo económico-social en el que la desconexión entre los índices macroeconómicos y el bienestar de la población es cada vez más profunda. Las condiciones materiales de vida, especialmente en la periferia europea y, sobre todo, entre los sectores más vulnerables, se degradan al mismo ritmo que crecen los beneficios de las oligarquías. Porque la lucha de clases es una tensión constante entre la parte que se apropian los propietarios de los medios de producción frente a la parte destinada a los salarios y gasto social. Y esa lucha ha retrocedido, la amenaza de las revoluciones ha retrocedido y en consecuencia aumenta el índice de explotación a favor de las rentas del capital en detrimento de las rentas del trabajo. Sin embargo, este proceso agudiza las contradicciones propias de la dinámica del sistema capitalista.

Y es que para sostener el crecimiento económico el neoliberalismo sigue alimentando las burbujas financieras, implicando nuevas y más fuertes crisis económicas. En los últimos años los planes de rescate bancario se han acompañado de enormes ayudas a los bancos por parte del Banco Central Europeo y que han inundado de dinero los mercados financieros. El horizonte es, en consecuencia, el de una nueva crisis financiera que recaerá sobre economías cada vez más débiles y sobre situaciones sociales más precarias.

En el marco español, y aunque la lucha sigue abierta, hay en marcha un proceso de restauración oligárquica. Las constituciones son siempre el resultado, aunque sea distorsionado, de la correlación de fuerzas en la sociedad, y la de 1978 con todos sus defectos fue elaborada tras una ofensiva del movimiento obrero y una crisis profunda de la clase dominante. En el presente vivimos una ola de reacción en el terreno legislativo, que se ha recrudecido en la última etapa buscando un endurecimiento de las normas legales para intentar ahogar la protesta social frente a la crisis.

La oligarquía ha logrado que se inicien una serie de reformas encaminadas a adaptar nuestras instituciones jurídico-políticas a las necesidades de este capitalismo en crisis. Las sucesivas reformas estructurales tienen como objetivo consolidar el régimen de acumulación neoliberal y facilitar así la constitución de un nuevo orden social caracterizado por la precariedad y el ajuste salarial permanente. En este sentido, la primera de las víctimas de este proceso constituyente es el propio *Derecho del trabajo*, en tanto que se ha convertido en el principal obstáculo para la revalorización del capital en las nuevas condiciones económicas y sociales. Con esta lógica los gobiernos del bipartidismo han aprobado duras reformas laborales que precarizan aún más el componente salarial.

A ello hay que sumar el tipo de inserción en la economía mundial. La economía española ha basado su crecimiento reciente en un modelo de endeudamiento que era insostenible y que implicaba enormes déficits comerciales, entre otros desequilibrios. El objetivo de la oligarquía es transitar hacia un modelo basado en los bajos salarios y en el que las exportaciones netas sean las que empujen el crecimiento económico. Eso sí, dada la estructura productiva de la economía española la única posibilidad es la competencia en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, con enorme precariedad laboral.

Así, el conflicto capital-trabajo se ha agudizado en los últimos años. No sólo porque el número de desempleados y desempleadas haya aumentado de forma exponencial sino también porque la participación de los salarios en la renta ha caído en picado en las últimas décadas. Al mismo tiempo, se han reducido mucho más los salarios de los trabajadores y trabajadoras peor pagados que el de los mejor pagados, de tal forma que se ha incrementado la desigualdad entre los propios perceptores de salario. También se ha reducido el tiempo de permanencia en la empresa, llevándonos a un mercado de trabajo aún más dual que antes de la crisis.

Pero no sólo el conflicto capital-trabajo está empeorando las condiciones de vida de las clases populares. También el patriarcado sigue cobrándose a las mujeres como víctimas del machismo y de su violencia. Los asesinatos de mujeres a manos de los hombres siguen sin contar con una adecuada respuesta de la administración pública. La brecha salarial y las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, alcanza desde 2015 el 24 % en nuestro país, una brecha que aumenta más aún para las mujeres con mayor edad. Las mujeres deben trabajar 88 días más para percibir el mismo salario que los hombres. Y otros tipos de violencia machista, tales como el acoso o los micromachismos dominan nuestras vidas cotidianas insertas dentro de cierto despreciable sentido común.

Al mismo tiempo, el conflicto capital-planeta también se ha agudizado como consecuencia de la mayor competencia económica internacional y de la producción masiva de productos a partir de la

transformación de materiales finitos mediante el consumo de energías fósiles. Esta competencia internacional se manifiesta en una carrera por el acaparamiento de los recursos naturales, y peor aún, una carrera por el acaparamiento de los derechos de acceso a esos recursos. El cambio climático prosigue su curso mientras la inmensa mayoría de los gobiernos desarrollados miran hacia otro lado. La amenaza ecológica es tal que es imposible pensar ningún proyecto político que no integre la perspectiva ecológica y un horizonte de sociedad solar.

Cada vez es más evidente que el Capitalismo no es reformable en un sentido positivo para la mayoría social, por lo que reafirmamos nuestra aspiración a construir el socialismo en el Siglo XXI. Todas las alternativas económicas para nuestro país pasan por diversificar la estructura productiva, redistribuir el tiempo de trabajo y hacer de los salarios el motor esencial de una demanda autocentrada. Ello implicaría políticas de redistribución de la renta y de inversión pública, así como el fortalecimiento del Derecho del Trabajo, si bien la mayoría de ellas chocan frontalmente con la camisa de fuerzas de la actual Unión Europea, especialmente por el papel del Banco Central Europeo, la arquitectura institucional y los últimos tratados y pactos por la austeridad.

CRISIS DE RÉGIMEN

La crisis económica de 2008 pone en evidencia un fin del ciclo iniciado con los consensos de la transición, y provoca una verdadera crisis del régimen. Estos consensos sociales derivados de una idea que relacionaba a Europa con la democracia y la mejora de la calidad de vida, y a la monarquía con la estabilidad y la paz, se resquebrajaron como consecuencia de los efectos directos de la crisis (desempleo generalizado, pérdida de poder adquisitivo por parte de amplios sectores populares), y de la ofensiva mediática y judicial que puso el foco en la corrupción de las estructuras políticas bipartidistas y de sus aliados nacionalistas. Al fin y al cabo, en las últimas décadas la corrupción ha sido funcional al modelo de crecimiento especulativo, estando muy vinculada al sector de la construcción y siendo además la corrupción el idioma común que han usado las élites económicas y las élites políticas.

Otro de los aspectos del régimen del 78 es el absoluto desprecio al medio ambiente, mostrando una voracidad sin límite en busca del beneficio de una minoría. La ley de costas, la política de trasvases, la realización o recrecimiento de pantanos, el desarrollo de estaciones de esquí, la falta de cumplimiento de las leyes existentes en materia ambiental, etc. son ejemplos de la necesidad de un cambio en sistema social que permita paralizar el expolio que la naturaliza viene sufriendo.

En un primer momento esta crisis de régimen se trató de resolver con políticas de austeridad mediante todo tipo de recortes sociales y democráticos. Sin embargo, como hemos apuntado, los marcos legales y constitucionales le venían muy largos al capital y no le permitían recuperar la tasa de ganancia. Incluso a pesar de la mayor transferencia de rentas públicas que hemos conocido en las últimas décadas. La crisis financiera y especulativa, ha llevado a los poderes económicos a plantearse nuevas fórmulas de negocio, que se centran en el trasvase de recursos públicos a manos privadas. Esta estrategia se concreta en las políticas de austeridad y en la modificación de las normas legales que suponían un obstáculo a dicha esta estrategia. En este contexto, los sectores más decisivos de las clases dominantes (el sector financiero entre ellos) han tomado conciencia de que es inevitable un cambio político que ponga fin a un régimen totalmente desgastado y corrompido y por lo tanto inútil para sus intereses. Esta es la base de lo que se ha llamado segunda transición, que busca mantener los elementos centrales del sistema bajo nuevas formas políticas. Esta operación se ha iniciado con el plan de renovación de la monarquía y trata de completarse con un gran pacto de Estado entre las fuerzas del sistema.

La coincidencia de los efectos negativos en los niveles de vida de la mayoría de la población con una profunda crisis política, cuya expresión más notable en el Estado español es el resquebrajamiento del régimen del 78. Esta coincidencia de factores de crisis ha impregnado la estructura hasta tal punto que demuestra el agotamiento de un ciclo histórico también en lo que se refiere a los partidos políticos tradicionales. Los partidos políticos, con más o menos distorsiones, son la expresión organizada de los intereses materiales de las distintas clases sociales. El cambio en la sociedad ha sido tan profundo, las condiciones objetivas y las conciencias están sufriendo tales transformaciones, que se ha producido un desfase respecto no solo a las instituciones políticas, sino también respecto a los partidos. Estos siguen siendo una expresión del pasado, acostumbrados a gestionar un período de pacto social, y ahora un conflicto mucho más agudo los ha aislado de la sociedad. Más concretamente ha demostrado que ya no son instrumentos representativos de las respectivas clases sociales. Lo que podía parecer sólo un problema de la izquierda, de los partidos transformadores, se revela ahora también como un problema de los partidos del régimen.

Desde la transición no se producía algo como lo que estamos viviendo en estos momentos, en que el PP es un estorbo, en lugar de un medio útil, para los intereses del Ibex 35, debido a que el partido antepone sus intereses como aparato burocrático frente a los intereses generales de su clase social. Este conflicto no ha hecho más que empezar y afectará, o está afectando a todas las fuerzas políticas sin excepción, incluidos a los partidos de la derecha nacionalista, tradicionales aliados del bipartidismo. Es un factor de oportunidad, pues demuestra que la sociedad está abierta a la búsqueda de salidas frente a una situación de insatisfacción. La audacia política se convierte en una necesidad, pues son muy pocas las ocasiones en que se nos ofrece la oportunidad de construir de nuevo las fuerzas políticas contando con la participación activa, con la implicación de miles de personas, para construir un cauce que exprese las necesidades del pueblo trabajador.

Se podría decir que en la lucha de clases se ha producido tal cambio en las reglas del juego y en las condiciones objetivas que las clases necesitan rearmarse, desde luego las clases dominantes están poniendo todos los medios a su alcance, que son muchos, para reorganizarse. Tenemos la obligación de contribuir a reorganizar las fuerzas de la clase trabajadora, pues nos estamos jugando no sólo el futuro de nuestras organizaciones sino el futuro de las condiciones de existencia del pueblo trabajador en su conjunto.

Estos cambios han provocado con el paso del tiempo una rápida transformación del panorama político de nuestro país. En este marco, la gestión de los resultados de las Elecciones Generales del 20-D han puesto en evidencia que asistimos a una nueva fase de la crisis de régimen, que se manifiesta esta vez en forma de crisis de gobernabilidad. Esta crisis no se va a resolver solamente con la constitución de un nuevo gobierno, pues el sistema necesita un nuevo marco de partidos y un nuevo marco constitucional que le permitan consolidar las reformas realizadas desde 2010.

Relacionado con lo anterior, en este tiempo se han puesto en entredicho los métodos internos de los partidos políticos, a partir de una demanda de mayor participación y democracia interna. Las primarias se han institucionalizado como mecanismos que permiten expresar directamente la voluntad tanto de los militantes como de los simpatizantes, en función del ámbito de decisión. Pero también las consultas a la militancia han sido más habituales en este período que en los anteriores, especialmente cuando se refieren a grandes decisiones. En esta línea, IU inició a finales de 2013 un proceso de reflexión por todo el país al que se llamó *Revolución Democrática y Social* que hay que lograr institucionalizar en la presente asamblea.

Un cambio de estas características necesita forzosamente del concurso y del protagonismo activo de todas las organizaciones sociales interesadas en disputar la hegemonía del sistema. Esta participa-

ción se convierte en estratégica, no coyuntural, no táctica y, por tanto, su organización y capacidad de propuesta organizada debe ser el eje de nuestra intervención política. Debemos actuar en el sentido de construir una organización pensada para la participación y la acción social, entrelazada con todos los movimientos opuestos al neoliberalismo.

La crisis del sistema de partidos es un síntoma de una crisis política de mayor envergadura: una crisis de régimen que pone en cuestión la legitimidad de todas las instituciones. Los votantes percibimos con claridad que en nuestros países occidentales los parlamentos tienden a convertirse en meros teatros de sombra, y que quienes mueven los hilos son las grandes empresas y la oligarquía. El poder de estas últimas es tal que doblegan a los gobiernos elegidos democráticamente, cuando no los compran directamente legal o ilegalmente para hacer y deshacer a su gusto. Este fenómeno, de largo aliento y en todo caso característico del capitalismo, se ha agudizado en los últimos años y especialmente tras las crisis económicas.

No obstante, si hasta ahora lo que se conoce como *democracias occidentales* han mantenido un gran respaldo ciudadano no es tanto por su constitución formalmente democrática, sino por sus resultados. Aunque fuera a costa de dejar al margen a mucha gente, sobre todo si abrimos la visión al conjunto del planeta, este sistema durante varias décadas ha dado resultados suficientes a una mayoría social en los países occidentales. Con enormes desigualdades en la participación en el reparto de la riqueza, por supuesto, pero con unos mínimos que permitían mantener el consenso en torno al sistema en sí. Sin embargo, parece que dicho consenso empieza a quebrarse porque los resultados en el reparto no son los mismos, y por tanto se cuestiona aquellas instituciones en las que habíamos delegado todo y se pone la lupa sobre ellas. Hay una toma de conciencia colectiva sobre la existencia de un robo generalizado que sabíamos que existía, pero que tolerábamos porque se vivía razonablemente bien. Se empiezan a romper, en resumen, consensos sociales y culturales que nos han mantenido encorsetados durante todo este tiempo.

También se ha producido un destacado giro cultural, especialmente entre la población más joven. Más insertos que sus mayores en las formas laborales y organizativas características del régimen de acumulación posfordista, sus formas de pensar la política se han demostrado muy diferentes y su comportamiento electoral, además, mucho más volátil y cambiante. Asimismo, son generaciones que no absorben con facilidad los rasgos propios de la cultura de la transición, la cual además no han vivido, y simpatizan mucho más con los nuevos movimientos sociales y sus reivindicaciones de carácter democratizador. Además, tienen también un fuerte componente de frustración respecto a sus expectativas profesionales y vitales como consecuencia de la crisis económica, democrática y social. Al mismo tiempo, existe un importante sector de la juventud, sin estudios superiores, especialmente golpeado por la crisis. Es este sector el que padece de manera más acuciante el desempleo de larga duración, el riesgo de exclusión social, y la ausencia de horizontes profesionales y vitales. Se trata de un sector juvenil que muestra una mayor desafección hacia la política y al que las fuerzas políticas de cambio tienden a pasar por alto, centrando la atención en los sectores juveniles más formados e ideologizados. Atender las necesidades de este sector y realizar trabajo político en su seno es una de las tareas pendientes de IU y del conjunto de las fuerzas del cambio.

Igualmente se ha transformado tanto la arena política como sus códigos, debido fundamentalmente al proceso de espectacularización de la política y el predominio de lo mediático en la configuración de la opinión política. Cada vez es más evidente que el capitalismo es incompatible con cualquier forma de participación de la ciudadanía en la vida pública. Las tertulias televisadas sobre política y los programas en horarios de máxima audiencia han constituido la arena de batalla fundamental donde tiene lugar la discusión política moderna, con todas las implicaciones que ello conlleva. De una parte,

la agenda política queda a merced de grandes medios de comunicación de propiedad privada y que sin duda tienen también intereses económicos y políticos. De otro lado, predomina la dictadura de la audiencia y el rasgo sensacionalista de la política, con su consecuente ejercicio de simplificación del mensaje político, la construcción de hiperliderazgos basados en la habilidad comunicativa y el dominio de lo estético.

En todo caso, y con independencia de que el sistema de partidos haya sido modificado por fuera y por dentro y en diverso grado, la disyuntiva entre restauración y ruptura en este momento de grave crisis institucional parece saldarse en beneficio de la primera. Estamos viviendo un proceso intenso de polarización social, pero con una característica clave: mientras la clase dominante se ha adaptado a los tiempos de crisis con cierta rapidez y aplica políticas implacables en defensa de sus intereses de clase, los partidos de la izquierda siguen aturdidos entre la melancolía del pacto social y de un "estado del bienestar" que ya no volverá y la carencia de una alternativa global de sociedad frente al capitalismo. Pero el proceso objetivo empuja cada vez más a la necesidad primero de resistencia y después de ofensiva para recuperar los derechos perdidos, plantar batalla y ofrecer alternativa superadora.

Ahora bien, lo que hemos visto en los últimos años es un importante descenso en el número de movilizaciones sociales. Quizás la causa es el incremento de las medidas represivas por parte del Estado, quizás el cansancio o quizás la descapitalización de muchos movimientos sociales, pero lo cierto es que las calles se han ido vaciando a pesar de que las razones para manifestarse se han multiplicado.

Existe también un proceso natural, en que los intentos de transformación social cambian de terreno de lucha. Tras una ola de luchas magníficas, que tuvo su momento álgido y con mayor carácter de clase en las marchas de la dignidad de 2014, se abrió una gran expectativa de transformación en el campo institucional, con la esperanza de ganar las elecciones. Las transformaciones en la psicología de masas se producen esencialmente a través de la experiencia, y ahora está habiendo un intento en este terreno parlamentario y municipal ya que muchos de los dirigentes han exagerado las opciones del campo institucional. Las instituciones están hechas para mantener el *statu quo*, el orden social existente, y debemos colaborar a que esa importante conclusión sea visible para la mayor parte posible de las clases populares, empujando en lo posible hacia la movilización y la participación consciente.

En función de este análisis tenemos que situarnos en este escenario y saber entender que en medio de esta crisis de gobernabilidad se abre la posibilidad de acelerar las contradicciones dentro del régimen. Contradicciones que permitan generar la movilización necesaria para la construcción de una opción de cambio de carácter rupturista. Para ello es necesario activar el despliegue de la organización que debe estar cada vez más centrada en la defensa nítida de un proyecto rupturista de salida a la crisis de régimen en beneficio de las clases populares.

ESTRATEGIA POLÍTICA

La crisis está golpeando sobre todo a las clases populares, especialmente a las capas más vulnerables. Hablamos sobre todo de privaciones de carácter material, como el acceso a una vivienda, a los suministros básicos tales como el agua o la luz pero también a la alimentación.

A pesar de este hecho incontestable, todos los análisis de la realidad nos han demostrado que los partidos anticapitalistas de Europa no han conseguido el respaldo mayoritario de las clases populares. De

hecho, se ha demostrado que en el conjunto de Europa los partidos anticapitalistas han captado a sus votantes debido a aspectos ideológicos y culturales, como la conciencia de clase, la participación en sindicatos o la identificación con la izquierda, pero no debido a los intereses materiales de las clases populares. El resultado es que cada vez hay más sectores golpeados por la crisis y la globalización que se encuentran huérfanos de referencias en la izquierda y se acercan a partidos neofascistas. Esto supone una verdadera amenaza, contra la que debemos ofrecer una alternativa rupturista y de izquierdas. Es una tarea ineludible recuperar los principios, valores y discursos de la lucha antifascista, promoviendo un movimiento conectado con las problemáticas concretas de los barrios y, especialmente, de las migrantes. Debemos incorporar como objetivos el desarticular el discurso y movimiento de la extrema derecha y el hacer permeables y accesibles los valores de la solidaridad, el antirracismo, la lucha contra la exclusión y la defensa de la diversidad.

Y es que estas crisis económicas generan respuestas populares. La mayor parte de las veces son respuestas populares de carácter no muy elaborado, muy localizadas y además desconectadas de un gran relato político alternativo. Otras veces las respuestas están organizadas, si bien se enfrentan a regímenes políticos que saben prever esas circunstancias y se preparan para ello a través de la represión y el autoritarismo y no a través de compromisos reales. El reto de la izquierda es articular estas respuestas populares que van surgiendo, cohesionarlas en la práctica y dotarlas de una narrativa política que las relacione en un proyecto político de transformación, lo que significa crear conciencia. La recomposición de esas luchas fragmentadas parece requisito imprescindible para sentar las condiciones de la alternativa. Al mismo tiempo, las respuestas populares también se organizan, y conviene entonces preparar el terreno para que la movilización social y popular se manifieste con intensidad.

Dicho de otra forma, el papel de Izquierda Unida en su marcha hacia ser un verdadero movimiento debe estar centrado en la construcción de redes y tejido social concienciado y movilizado en torno al conflicto, extender la conciencia de clase, para lo cual debe dotarse de unos instrumentos organizativos adaptados a ese fin. El foco ha de estar situado en la calle y en los conflictos sociales, tejiendo redes de solidaridad que combatan el ascenso del individualismo neoliberal y de la extrema derecha al mismo tiempo, y dejando el aspecto electoral meramente como validador a posteriori de estas prácticas.

En este punto se unen las dos reflexiones: sobre la crisis de régimen y sobre nuestra crisis. Nos centramos en el conflicto para ahondar en la crisis de legitimidad del régimen político. Más allá del análisis demoscópico o geográfico, los mejores resultados de IU se han producido al calor de la movilización social. La vía para recuperar nuestro espacio es la movilización porque ella es la que crea conciencia de clase.

Para ello es indispensable que el discurso recobre toda su perspectiva de clase, interpelando a las clases populares acerca de sus problemas y sus soluciones y mediante un lenguaje que sea inteligible y pedagógico. Si nuestra clase social no entiende nuestro discurso, el problema es nuestro y no de otros. Nuestras sociedades están atravesadas por conflictos de clase y conflictos de otra naturaleza, como el ecológico o el de género, y necesitamos una organización que al mismo tiempo que sitúe esos conflictos en el centro del debate sea igualmente pedagógica. Esta reflexión tiene obligatoriamente su reflejo en la parte organizativa mediante una estructura de dirección dirigida a organizar el conflicto y a implicar a quienes protagonicen el conflicto en construcción de un Proyecto de nuevo país como alternativa sociopolítica que rompa con la actual realidad.

Vivimos también en una sociedad que encorseta a las mujeres en un concepto de feminidad completamente ajeno a la idea de iguales; a través de los medios de comunicación, con programas banales y

sexistas dirigidos al público femenino. Todo ello no es casual, pues tiene como fin perpetuar los roles sexistas y estereotipos que sitúan a la mujer en un segundo plano de la sociedad y así apuntalar el sistema patriarcal.

Uno de los pilares en los que se basa la hegemonía del sistema capitalista es el patriarcado: unos valores ideológicos y unos estereotipos que relegan a la mujer a un papel secundario en la sociedad, que plantean el desigual reparto de la riqueza y del trabajo productivo y reproductivo entre hombres y mujeres. Una brecha salarial que va en aumento, la regulación de la prostitución como opción laboral para las mujeres pobres, la tolerancia misógina de la iglesia, la escasa implicación de los poderes públicos en la lucha contra la violencia machista son entre otros muchos elementos claves en el esquema de dominio que el capital ejerce sobre la mayoría social. Por lo tanto, no hay justicia ni democracia sin mujeres libres e iguales a los hombres en derechos económicos, políticos, sociales y culturales. La feminista es una revolución pendiente y nos comprometemos con ella para terminar con el patriarcado como uno de los elementos fundamentales para la construcción de un proyecto de nueva sociedad.

Frente a este sistema patriarcal oponemos la lucha de feminismo como única salida para acabar con la opresión tanto de las mujeres como del colectivo LGTBIQ. Esta lucha debe ser un pilar que estructura nuestra actividad política, tanto interna (eliminando roles de género y comportamientos hetero-patriarcales instalados en nuestra organización) como externa, participando junto a otras compañeras y colectivos de la lucha feminista y transfeminista; de cara a construir un movimiento feminista unido, combativo y capaz de construir lazos potentes de sororidad y nuevas formas de relación no opresivas.

Uno de los puntos más débiles del sistema capitalista son sus contradicciones medioambientales, el capitalismo solo puede crecer a costa de destruir el medio y no puede dejar de crecer porque eso es parte de su esencia. Además, no es concebible una sociedad desregulada socialmente y regulada ambientalmente, de hecho, una de las primeras medidas que han ido aplicando los gobiernos conservadores en todo el mundo ha sido destruir la legislación medio-ambiental, impulsada en su momento por la socialdemocracia y la presión social.

De hecho, la desregulación ambiental es otra gravísima agresión contra las clases populares, con la única diferencia que sus peores consecuencias se verán a más largo plazo, pero que afectarán profundamente a la calidad de vida de la población desde el momento en que provocarán un encarecimiento de las materias primas, gravísimas hambrunas, migraciones masivas y desarrollo de nuevas enfermedades, lo que limitará las posibilidades de supervivencia de nuestra especie.

Defender el medioambiente implica cambiar profundamente el modelo de relaciones productivas y sociales, por lo que su defensa consecuente pasa necesariamente por un modelo social anticapitalista, lo que implica que la ecológica es también una revolución pendiente que la izquierda debe asumir realmente. No basta con los formales apoyos a la defensa del medioambiente y los tímidos y contradictorios actos prácticos, es necesario asumir la lucha ecológica como otra cara de la lucha contra el modelo capitalista y avanzar consecuentemente en un modelo de desarrollo distinto.

OBJETIVOS POLÍTICOS E INSTRUMENTOS

Lo anterior es el reconocimiento, claro está, de que hasta ahora no hemos conseguido el objetivo de Izquierda Unida de constituirnos como movimiento político y social. Izquierda Unida se fundó como

organización que recogía lo mejor del movimiento obrero y lo mejor de los nuevos y nacientes movimientos sociales, y sin duda en ese mestizaje virtuoso se ha producido un éxito notable. Sin embargo, en la I Asamblea de Izquierda Unida, en 1989, se explicitó que nuestra organización tenía que renunciar a ser un partido político tradicional, es decir, que no hiciera de lo electoral su razón de ser.

Desgraciadamente ese ha sido un objetivo no cumplido. IU se ha convertido cada vez más en una maquinaria electoral que ha dedicado su actividad política y la mayoría de sus recursos y estructuras a los hitos electorales. Así, se ha ido produciendo una conexión insuficiente entre los conflictos sociales y el ser de la organización. Siempre ha existido una conexión entre IU y los conflictos laborales, gracias a un nítido compromiso político, pero esa relación ha sido más pasiva que activa. IU asistía e incluso participaba en el conflicto pero no era ni vertebraba el conflicto.

Al mismo tiempo, las estructuras de la organización se han burocratizado como en cualquier partido político clásico. Eso ha convertido IU en una organización lenta, burocrática e inmovilista en su proclamada refundación, no cumpliendo los compromisos adquiridos con la militancia en sucesivas asambleas.

No en vano en la IX Asamblea se reconoció que IU era «una formación que tenía la vocación de ser una fuerza alternativa y que hacía de la crítica a las formas tradicionales de hacer política un aspecto central de su identidad, se había convertido en la práctica en un partido más, totalmente volcado en lo institucional, con importantes déficits en el funcionamiento democrático». Se recordaba asimismo que en el tiempo anterior «se fue produciendo una institucionalización perniciosa, que dejó la organización en manos de cargos electos y de equipos dirigentes que centralizaron en una minoría las decisiones estratégicas en lo político y organizativo, vaciando de competencias los órganos, gobernando en función de intereses que no eran los de la organización». En aquella asamblea se recordaba también que «Izquierda Unida se encuentra sumida en una grave crisis política y organizativa que amenaza la viabilidad del proyecto para el cual nació, proyecto que no era otro que ser el espacio de convergencia política y social de las ideas y los activistas que defienden un modelo social alternativo al del capitalismo neoliberal, globalizador y deshumanizado que nos quieren presentar como única alternativa viable de modelo de sociedad».

Finalmente, el documento planteaba que «IU debe ser el embrión de la recuperación política de la izquierda transformadora y anticapitalista española, sin descartar que al final de ese camino de la actual IU nazca una fuerza política diferente, más rica y plural, un verdadero movimiento político y social con verdadera influencia política y capacidad de realizar los profundos cambios que nuestra sociedad demanda». Ese proceso, llamado de la refundación de la izquierda, fue aprobado por la IX Asamblea de IU en noviembre de 2008.

Dos años más tarde, en junio de 2010, se publicó el *Llamamiento* a *la Izquierda* en la que se reconocía que en IU existía «la ilusión de converger con otras personas en un espacio común de deliberación y aprendizaje colectivo en un proyecto emergente, cooperativo». Concretamente se afirmaba que «el camino de la refundación de la izquierda en nuestro país en un proceso constituyente, es ya irreversible». Y, en definitiva, el llamamiento era explícito hasta el punto de que se reconocía que «no hay un final predestinado, más allá de esa voluntad de culminar con una formación política de nuevo tipo».

Finalmente en la X Asamblea, en 2012, se continuó recordando que «Izquierda Unida ha de reconocer que, a partir de la larga etapa que va desde la III Asamblea Federal a hoy, hemos ido construyendo de hecho, en lo organizativo, un partido político mucho más que el movimiento político y social que decimos ser». También se decía que «es el momento de culminar este proceso avanzando en la X

Asamblea Federal hacia un profundo cambio organizativo en I.U. de métodos de funcionamiento y de personas que practiquen con coherencia», cosa que en todo caso no se hizo tampoco.

Continuando así con aquellos acertados diagnósticos, y que son lo aprobado por nuestra militancia, en la XI Asamblea queremos declarar que la actual configuración y enfoque de Izquierda Unida tiene que adaptarse a los cambios sociales y políticos que han tenido lugar en los últimos años.

La tarea de la nueva dirección será la de acometer profundos y ambiciosos cambios para adaptarse a las necesidades de las clases populares. Ello se traduce en constituir una organización más ágil, rápida, democrática y eficaz que trabaje para conformar un verdadero movimiento político y social que vaya más allá de IU. En este sentido, la IU resultante de la XI Asamblea debe ser una organización en transición hacia un nuevo movimiento anticapitalista, ecologista y feminista que esté volcado en los conflictos sociales y que sea, ante todo, un verdadero movimiento político y social.

Necesitamos una IU volcada en la construcción de una alternativa que sustente la estrategia de una ruptura democrática y que plantee un proyecto de nuevo país. De esta manera, plantear la recuperación electoral como un objetivo en sí mismo es un completo error estratégico que nos puede llevar a la frustración y a creer que no existe espacio suficiente para desarrollar nuestra estrategia. Mientras que si, por el contrario, la centralidad de nuestra acción política se sitúa en la consolidación del espacio de este proyecto rupturista las perspectivas de futuro en todos los ámbitos, incluido el electoral, se amplían y toman otro sentido.

UNIDAD POPULAR Y CONFLUENCIAS

Las organizaciones políticas responden a intereses sociales concretos y, en la medida en que la estructura social se transforma, la evolución en las formas organizativas ha de darse igualmente. Precisamente, la izquierda española fue pionera en transitar un camino que después recorrerían muchas otras organizaciones en el resto de Europa. La fundación de Izquierda Unida no fue una mera respuesta ante una situación electoral adversa, sino una inteligente adaptación a transformaciones socioeconómicas en marcha que cambiaban de forma decisiva la vida social y cultural de la clase trabajadora. Y tuvo la virtud, además, de ser capaz de abrir una nueva etapa sin echar por la borda todo el bagaje que las distintas tradiciones de la izquierda habían acumulado durante décadas. Una lección decisiva para el momento actual.

Como ya se ha mencionado, la sociedad española vive también hoy cambios muy profundos. Y ello nos obliga a plantearnos si la formulación actual de Izquierda Unida sigue siendo la mejor herramienta organizativa para tratar de alcanzar los objetivos políticos que nos planteamos. No es un debate nuevo: las últimas Asambleas han planteado la necesidad de repensar la izquierda, ampliar sus límites y cambiar sus formas. La X Asamblea Federal apostó de manera decidida por avanzar hacia un Bloque Político y Social como proyecto de mayorías para lograr una posición hegemónica en una sociedad cuyos cambios habíamos analizado con acierto. Se trata ahora de reafirmar, actualizar y cumplir de una vez por todas con aquella apuesta.

En este tiempo desde la X Asamblea hemos vivido dos etapas bien diferenciadas. Inicialmente, hubo una continuidad en el intenso ciclo de movilizaciones abierto desde la Huelga General de 2010 y el 15 de Mayo de 2011. A partir de 2014, y ante la inminencia de un ciclo electoral de dos años,

se produjo la sedimentación institucional de parte de esa energía desplegada a través de distintos cauces. Surgieron formaciones políticas nuevas y se experimentaron alianzas entre organizaciones y ciudadanía no organizada, aunque siempre con fórmulas diversas.

La participación de Izquierda Unida en todos esos procesos ha sido desigual y, desde luego, nada sencilla. Pero, aún con toda su complejidad y asumiendo los múltiples errores y deficiencias de todas estas experiencias, podría decirse que el Bloque Político y Social se ha ido conformando, de forma inconclusa, en algunas de sus vertientes. Es verdad que no le ha correspondido a nuestra organización el papel vertebrador de ese Bloque como hace cuatro años podía haberse imaginado. Pero ello no ha sido óbice para que IU haya jugado y juegue un papel central en algunas de las expresiones locales o territoriales que han cristalizado en los últimos meses o en las movilizaciones sociales que se han producido y que son elementales para la configuración del bloque.

Ese papel central de IU en proyectos que están protagonizando ya hitos inéditos en importantes ciudades, o que incluso tienen su réplica en algunos territorios históricos, contrasta con otras realidades locales y autonómicas en las que el apoyo electoral, salvo notables excepciones, está estancado o en retroceso a pesar del desgaste del bipartidismo. Ello no se debe a un peor trabajo, sino a multitud de condicionantes, muchos de ellos exógenos, que han impedido un desarrollo más homogéneo de los procesos de confluencia. Siendo así, en muchos de estas realidades, IU mantiene capacidad de influencia social y política y sigue realizando una labor institucional reconocida.

Todo ello nos lleva a una doble constatación. En primer lugar, que está en marcha la conformación de un bloque social y político complejo, contradictorio en ocasiones, del que IU forma parte, pero con el que interacciona de manera diversa territorialmente. En segundo lugar, que las referencias electorales para nuestra organización, a día de hoy, son diversas, y que seguramente se trata de un proceso que no se revertirá a corto plazo.

En todo momento entendemos que la unidad popular es un concepto que va mucho más allá de la mera colaboración electoral y sus distintas modalidades. Y es que la unidad popular no una herramienta para la maximización de actas de diputados. Tampoco es una consigna electoral. La unidad popular es una estrategia que se manifiesta en las huelgas generales, en la paralización de los desahucios y en cualquier conflicto social donde las clases populares trabajan juntas a pesar de sus afiliaciones políticas o sindicales. En los últimos años hemos visto muchas expresiones diferentes de unidad popular. Las huelgas generales de 2010 y 2012, el movimiento 15-M en 2011, las mareas en defensa de los servicios públicos de 2012 en adelante, las movilizaciones de Rodea el Congreso o las Marchas por la Dignidad son ejemplos de ello. Y, cuando se dan las condiciones, es muy necesario replicar esa misma actitud en los hitos electorales. Esa es la idea que tenemos de la unidad popular, sintetizada en la expresión *marchar separados, golpear juntos*.

Lo que ha transformado las conciencias ha sido la experiencia directa de una realidad dolorosa, a través de los efectos de la crisis económica y de las políticas neoliberales, pero el verdadero cambio se produce al comprobar que es posible cambiar la realidad, que es posible frenar los desahucios, que es posible paralizar los planes de destrucción de la sanidad pública, que es posible ocupar las plazas y las calles…. El grado de politización generalizada de la sociedad no se producía en décadas. Todo ello ofrece una gran oportunidad, pues con procesos descendentes, que centran su atención en las instituciones, volveremos a tener procesos ascendentes.

El papel de IU en la fase actual debe situarse en la consolidación y avance del espacio de este proyecto rupturista en el terreno social, económico e institucional. Por tanto, junto a las prácticas de resistencia y de confluencia de las luchas parciales debe abrirse la fase de la construcción del poder popular. Esta nueva fase debemos crear espacios democráticos para la decisión y el control

desde la base, para evitar que la crisis del sistema político se resuelva con la cooptación de nuevas élites.

La unidad aparece así ante quienes quieren transformar su realidad cotidiana, como un valor en sí mismo. Es lógico que sea así, pues "lo que no podemos hacer muchos, no lo pueden hacer unos pocos", pero nosotros sabemos que con la unidad no es suficiente, como no es suficiente con ganar unas elecciones. Necesitamos además un programa de transformación socialista de la sociedad y la voluntad de llevarlo a cabo frente a todas las resistencias.

Pero para tener esa oportunidad es necesario unir fuerzas, por ello debemos seguir siendo los más consecuentes defensores de la unidad de la izquierda en un frente electoral que pueda obtener la victoria en las urnas. Pero vamos más allá, queremos una unidad estable, conquistar un frente que agrupe las fuerzas transformadoras, pero sabemos que esa colosal tarea no se consigue por pactos cupulares, sino que será el producto de la lucha cotidiana, de la unidad de acción en luchas concretas que imponga los resultados positivos de la unidad por encima de cualquier sectarismo. La PAH ha sido un ejemplo clarísimo de como la lucha puede provocar no sólo conquistas parciales sino transformaciones sociales. Ese debe ser el objetivo, llevar esa táctica a todos los terrenos, especialmente recuperando la lucha en el terreno sindical, defendiendo nuestras ideas en el seno de unos dirigentes sindicales y unas estructuras que no han sido capaces de cambiar con la sociedad y siguen anclados en la época del pacto social.

El objetivo es configurar un Bloque Social y Político de carácter alternativo para sustentar la estrategia de ruptura democrática y social para un proceso constituyente. Y la estrategia es avanzar en la más amplia unidad popular, en un sentido completo y no sólo electoral, y debemos aplicarnos en concretarla y desarrollarla en el próximo ciclo político.

Se trata de crear un espacio social y político de convergencia, que sume e integre a todos estos agentes en un proyecto alternativo, en un movimiento para la transformación social. Y que esta integración se haga desde el reconocimiento y la suma de las diferentes aportaciones, experiencias y recursos de las diferentes organizaciones, en un marco de igualdad en cuanto a su legitimidad y de democracia directa en la toma de decisiones. Este llamamiento a la convergencia en 2016 no puede ser ya el mismo que el realizado en 2008: la situación política es claramente distinta. La convergencia de mañana, si verdaderamente apostamos hoy por ella, será en un espacio abierto, naturalmente con IU, pero también con otras organizaciones igualmente legitimadas y superando los límites de nuestra propia organización.

Un nuevo espacio, Bloque o Plataforma político social plural que se articule y organice internamente, desde la deliberación y las metodologías participativas, sobre tres ejes fundamentales: la concienciación y movilización social, la elaboración política y la propuesta electoral común."

La unidad popular es, por lo tanto, la única estrategia posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida. No sólo en España. Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo. Desde las entrañas de una sociedad que demanda pan, trabajo, techo y dignidad. Reiteramos nuestro llamamiento a la altura de miras ante un momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa.

Por otra parte, las elecciones municipales de 2015 han sido un escenario para probar diferentes tipos de candidaturas de confluencia. Aunque su origen es complejo y diverso, lo cierto es que muchas de esas candidaturas obtuvieron resultados extraordinarios y fueron capaces de ganar en muchas ciudades. Allí fue también necesaria la presencia de Izquierda Unida junto con las militancias y cuadros de otros partidos. La heterogeneidad resultante fue muy importante, y la mezcla de culturas políticas

también. Permitieron ilusionar a la ciudadanía de izquierdas y a la vez demostraron que era posible abrir una brecha electoral al bipartidismo. No obstante, en ningún caso se consiguió mayorías suficientemente amplias como para gobernar en solitario.

Pero uno de los principales problemas que enfrentan estas candidaturas son las restricciones económicas que tienen como consecuencia del contexto económico y fiscal. Salvo alguna excepción, la mayoría de las ciudades está bajo vigilancia estricta del gobierno del Estado y, además, sometida a fuertes imposiciones financieras que limitan por mucho la capacidad de gestión política. Al mismo tiempo, la falta de una ideología definida y de objetivos económicos y sociales concretos ha marcado una tendencia a la política de gestos que ha intentado compensar la ausencia de políticas vinculadas con los aspectos materiales de la ciudad. Por lo tanto, mientras estas candidaturas no superen en actual marco municipal, no podrán dar respuesta a las esperanzas despertadas, nuestro reto es que estas candidaturas entiendan que su propio futuro va ligado al éxito de un proyecto de carácter alternativo que rompa el actual marco normativo. También tenemos que señalar la actual incapacidad de estas candidaturas para tejer espacios de decisión que vayan más allá de lo institucional, algo que habrá que abordar con urgencia para evitar la institucionalización y desconexión con respecto a la calle.

En las últimas elecciones generales Izquierda Unida acudió a las urnas en el marco de Unidad Popular, un espacio democrático de reciente creación. Valoramos muy positivamente la experiencia de estas candidaturas de Unidad Popular, que es una experiencia que obedece a los criterios unitarios, participativos y transformadores que caracterizan nuestra política de alianzas. Debemos de reconocer que, a pesar de nuestro trabajo, en algunos casos a nivel municipal o autonómico, lo conseguido ha sido insuficiente, y no sólo desde el punto de vista electoral, al no ser capaz de integrar en este proceso a otras organizaciones y tradiciones políticas, relevantes en la configuración de la izquierda social y política actual.

En cuanto a los procesos de confluencia electoral en el marco de las elecciones generales, que no son en estos momentos espacios de unidad popular, somos conscientes de que existen ritmos diversos en función de los territorios. Es normal en un escenario de descomposición del sistema tradicional de partidos y en mitad de una grave crisis económica, que se da además en un país atravesado por conflictos de identidad nacional. Sin duda, un paso necesario es gestionar esas diferencias y tratar de acompasar los ritmos en la medida de lo posible. En todo caso, la cuestión central es asegurar que la toma de decisiones y las actuaciones de quienes pertenecemos a IU, en cualquier ámbito político y territorial de la vida política, estén en función de los acuerdos que se toman en el ámbito federal.

No obstante, las experiencias de confluencia han puesto de relieve su potencialidad en un contexto socioeconómico como el actual, despertando un enorme atractivo entre la población y poniendo sobre la mesa claras posiciones de ruptura democrática. Nuestra apuesta por estas fórmulas está fuera de duda y trabajaremos además para demostrar al resto de fuerzas políticas la necesidad de que se convierta en una apuesta estratégica común de ámbito estatal, y no táctica y desigual territorialmente.

Defendemos la confluencia como un espacio acogedor en el que se sientan cómodas todas las personas que se reconozcan en él, tanto individual como colectivamente. En el que cada persona y organización sienta reconocida su aportación con independencia del tamaño de la misma. En el que cada persona y organización se vea reconocida en las decisiones tanto de carácter político como organizativo. La construcción de estas confluencias se debe dar en base a dos elementos importantes: la federalidad, y la radicalidad democrática. La federalidad debe permitir la construcción de espacios de unidad popular en los diferentes territorios del estado, garantizando la coherencia de una propuesta política, organizativa y electoral común. Finalmente, la radicalidad democrática en la toma de decisiones y en los mecanismos concretos de elección, debe ser la metodología utilizada para garantizar

la construcción plural del espacio y blindar el valor político que tiene la unidad de acción política y social.

En coherencia con el análisis de este texto y los documentos aprobados durante años por la militancia de IU, hay que seguir construyendo espacios de colaboración electoral siempre que se den las condiciones que aseguren el reconocimiento de la identidad de nuestro proyecto político y un suficiente espacio programático común. Mientras construimos un movimiento político y social que vaya más allá de IU tenemos que reforzar toda nuestra colaboración con otras fuerzas y movimientos.

Plantear hoy la propuesta de una izquierda alternativa, anticapitalista, republicana, antipatriarcal y ecologista no es posible partiendo desde cero. IU es una realidad en la que se referencian miles de cargos públicos y personas que tienen a IU como único espacio de militancia política. Pero al mismo tiempo nuestro reto es construir con otros muchos un espacio de confluencia social y política que refleje las alianzas del Bloque Social y Político de carácter alternativo, con un programa común. Se trata en este momento de desarrollar una estrategia de confluencia que conforme la más amplia unidad popular con objetivos claros de ruptura y sustentados en una base programática.

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ORGANIZATIVOS

Desde nuestra I Asamblea nos hemos definido como un movimiento político y social, pero nunca hemos sido capaces de cumplir con ello. Las intenciones de ser un movimiento político y social se torcieron y fuimos transformándonos en un partido político clásico volcado en las instituciones y en las elecciones. De una IU inicial que se estructuraba organizativamente desde la centralidad de las áreas y la horizontalidad, en la que se visibilizaba también a pluralidad y territorios, pasamos a una IU partido político-maquinaria electoral a partir de la III Asamblea. En ese desplazamiento se comenzó a priorizar el papel de los aparatos frente a la elaboración colectiva y la movilización social, primando la verticalidad frente a la horizontalidad. Sin embargo, en la IX Asamblea afrontamos este debate y acordamos transformar IU organizativamente para recuperar sus señas de identidad como movimiento político y social.

Ocho años después hemos de reconocer que aunque se modificó la línea política, frente a la subordinación al PSOE de Zapatero del que hacía gala la dirección anterior y situando el eje del discurso en la contradicción capital trabajo y en la autonomía y soberanía de IU, nuestras contradicciones nos impidieron avanzar con la misma firmeza en la transformación organizativa de IU. El proceso de refundación se detuvo cuando las encuestas empezaron a darnos buenos resultados. Creemos que no haber resuelto a tiempo estas contradicciones, no haber sido más audaces en la aplicación de lo que acordamos en la IX Asamblea Federal, es una de las causas del retroceso social y electoral que hemos visto en este ciclo electoral que acaba de concluir.

En la actualidad existe un consenso generalizado en Izquierda Unida sobre las debilidades en materia de organización y comunicación, según ha revelado la primera fase de la Asamblea. En particular detectamos que IU ha funcionado como un partido político tradicional en numerosos rasgos. Baste señalar cuatro de ellos:

– La participación externa, aunque también la interna, ha tenido como objetivo fundamental la elaboración programática, algo muy enriquecedor y exitoso. Pero las decisiones políticas estratégicas

han tendido a tratarse en espacios cada vez más jerarquizados y cerrados, y no en las asambleas. Al final, la mayoría del tiempo se ha dedicado a mantener o cambiar correlaciones de fuerza en los órganos de dirección que eran los que decidían la representación institucional.

- Progresivamente hemos construido unas estructuras típicas de partido con hasta cuatro niveles de dirección. La militancia en IU de una gran parte de las personas activas se limita a participar en las innumerables reuniones que tal proliferación de órganos provoca; más las anexas de "corriente", "sensibilidad", etc. Sencillamente, no hay tiempo para más. Tal proliferación no sólo no es más democrática sino que crea las condiciones para que las decisiones se tomen en otro sitio y la organización se convierta en una trituradora de la energía de militantes y activistas.
- Los órganos no sirven para repartir el trabajo y cumplir con lo aprobado en los espacios de decisión colectiva (en las asambleas), sino que se han convertidos en pequeños parlamentos dónde en cada órgano el coordinador presenta un informe que se debate durante horas. No existe ningún reparto de trabajo ni búsqueda colectiva del consenso. Además, suelen hablar mayoritariamente hombres, siendo un espacio masculinizado y poco atractivo para aportar.
- La desconexión entre las distintas estructuras es frecuente, no se transmiten los acuerdos y por lo tanto no existe una estrategia común ni una prioridad en la intervención social e institucional. Las asambleas de base, las más de las veces, se limitan al seguimiento del trabajo institucional y a los procesos internos.

Creemos que es necesario romper con esta forma de trabajo y situar en el centro del modelo organizativo la democracia participativa, la sistematización del trabajo y la construcción de una organización volcada en el conflicto.

Construiremos una estructura sencilla y ágil, que permita a la militancia volcar sus esfuerzos en la acción externa, en la calle y no en interminables reuniones de carácter interno. Eso significa que el militante deberá ocupar la mayor parte de su tiempo en vincular a la organización con la sociedad. Las actividades internas deberán reducirse a lo estrictamente necesario. Hay que añadir la necesidad de crear espacios amables de militancia, feminizando la organización y nuestro discurso. Al fin y al cabo se puede afirmar que los problemas organizativos y comunicativos son estructurales en nuestra organización, lo que requiere soluciones estructurales. Especial cuidado se pondrá en buscar soluciones ágiles para resolver los conflictos que puedan atañer a las mujeres por razón de género.

PONER LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL

El análisis político de este documento nos lleva a plantear un cambio profundo del modelo organizativo, basado en las siguientes premisas:

- Concebir nuestro movimiento como parte del bloque político y social: queremos ser un sujeto que aporta el bagaje político, social y cultural de la izquierda que es imprescindible conservar y desarrollar, y que aspira a construir colectivamente con otros un proyecto de mayorías para la transformación social.
- Centrar los esfuerzos en la batalla social y cultural: nuestro modelo organizativo se ha desarrollado en paralelo al organigrama institucional y se ha hecho excesivamente dependiente de lo electoral.

Nuestra apuesta de transformación es a medio y largo plazo y lo institucional es uno de los frentes en los que trabajamos, no el que nos define.

- Orientar el trabajo institucional a un proceso de cambio global: el diseño y la práctica de un trabajo institucional alternativo, además de servir a los intereses inmediatos de la mayoría trabajadora, debe aprovecharse para propiciar los cambios estructurales en la sociedad, que consideramos necesarios.
- Feminizar, rejuvenecer y "popularizar" la organización: es fundamental explorar nuevas formas de funcionamiento y de debate o nuevas áreas de trabajo para que tengan hueco y protagonismo sectores a los que apelamos pero que tienen poco peso real en nuestra vida interna y pública.
- Profundizar en apertura, flexibilidad, democracia interna, ética y transparencia. Seremos un espacio vivo, participado, que incorpore para sí en términos de democracia, participación y transparencia lo que queremos para el nuevo país. Para ello nos dotaremos estatutariamente de todas las figuras que lo garanticen.
- No obstante, todo esto no es una tarea que Izquierda Unida deba afrontar en solitario. Hay otras formaciones, espacios y, sobre todo, personas a título particular, con las que nos hemos venido encontrando en la movilización, en los movimientos sociales, en las candidaturas municipalistas o en las de Unidad Popular que también tienen mucho que decir sobre el futuro de la izquierda rupturista. Nuestra vocación es la de participar en el proceso constituyente de un movimiento político y social que recoja lo mejor de nuestra tradición y nuestra cultura, la experiencia acumulada y sea capaz de articular una herramienta más potente y más amplia a partir de las premisas anteriormente señaladas. No obstante, no nos corresponde abrir ese proceso, al menos no en exclusiva. Izquierda Unida se pone a disposición para participar en él y llevarlo a buen puerto.

En esta línea, esta asamblea debe servir para consolidar determinados cambios de cultura político-organizativa que se han dado en nuestra organización en los últimos años, gracias en gran medida a la relación con nuestro entorno político y social (primarias, comunicación, redes, diversas formas de participación y expresiones electorales…). Debemos tener en cuenta que los procesos en los que hemos participado tanto en las elecciones municipales como en las generales, con todas sus contradicciones e insuficiencias, nos han recordado las señas fundacionales de Izquierda Unida: radicalidad democrática (primarias para la elección de candidatos y candidatas), asambleas abiertas para la elaboración de los programas electorales y las alianzas en torno al programa, otras formas de hacer política, métodos de elección inclusivos y paritarios, etc. La realidad nos ha hecho avanzar mucho más en la construcción de un movimiento político y social. Por tanto, es el resultado de estas experiencias el que debemos trasladar al debate de la XI asamblea: normativizar la experiencia y no al revés.

Para contribuir a ese proceso, Izquierda Unida debe afrontar algunos cambios de aplicación inmediata y otros a medio plazo de cara al proceso constituyente:

- Garantizaremos que la democracia participativa es un principio que se aplica y que permite la sistematización de la toma colectiva de decisiones, la planificación, la evaluación, la fiscalización de los órganos, de las responsables y los cargos públicos; buscar mecanismos de fiscalización y transparencia del trabajo institucional, que no permita la separación entre el trabajo institucional y las clases populares.
- Generalizaremos fórmulas que potencien la implicación de la gente en la acción política y las luchas sociales desde fórmulas de radicalidad democrática, como pueden ser las asambleas abiertas decisorias, las asambleas de rendición de cuentas, las primarias, los referendos, los revocatorios, etc.

- Haremos más flexibles las formas de militancia, permitiendo que el militante, en función de sus capacidades y objetivos, pueda decidir dónde y cómo militar: activismo, elaboración política, redes de trabajo, asambleas territoriales… En este sentido, reformularemos progresivamente la estructura organizativa, desde la actual concepción territorial a otra que prime fundamentalmente el activismo y la elaboración de propuestas en ámbitos sociales concretos.
- El verdadero feminismo se practica, para que las mujeres puedan tener un rol más participativo en la organización se deben prever temas de conciliación familiar dentro de la propia organización. Muchas madres/padres de nuestra organización no pueden participar todo lo que le gustaría, aun teniendo la suficiente preparación, ya que sus obligaciones familiares se lo impiden. Si exigimos que las empresas cubran parte del gasto en materia de conciliación, nuestra organización debe hacer también ese esfuerzo.
- Adecuaremos el tamaño de los órganos de dirección a las funciones y competencias que les asignemos, para hacerlos más ágiles en la reacción. Reformaremos los reglamentos de funcionamiento para facilitar el debate organizado, a través de comisiones o grupos de discusión y regularemos estrictamente los plazos para enviar con suficiente antelación la documentación a debate. Introduciremos elementos de democracia participativa en la gestión metodológica de los órganos.
- Utilizaremos herramientas tecnológicas que permitan tanto el intercambio previo de opiniones, como la asistencia virtual a reuniones, especialmente para los órganos ejecutivos que se reúnen con mayor frecuencia. Pero sobre todo para garantizar la universalidad en la toma de decisiones y la flexibilidad en la participación de la militancia.
- Planificaremos el discurso y la comunicación, generando herramientas para el conjunto de la organización y estableciendo un plan continuado de formación en comunicación política en sus distintas vertientes. Sin despreciar nuestro trabajo de cara a los medios de comunicación tenemos que asumir que nuestra principal herramienta de comunicación es la acción política en el conflicto.
- Generaremos redes de trabajo voluntario que permitan aprovechar las capacidades, el ingenio, la imaginación y habilidad de nuestra comunidad para, al menos, formación interna, redes sociales, argumentarios, sociología electoral y análisis de encuestas e intervención académica. Asimismo, para desprofesionalizar y desburocratizar IU conformaremos direcciones políticas en las que haya, en pie de igualdad, personas liberadas y otras que no lo son.
- Formaremos a la militancia en conceptos ideológicos fundamentales, tanto aquellos históricos que forman parte de nuestros principios y los de la organización, como aquellos que debamos renovar o desarrollar para enfrentarnos a la nueva realidad existente y a los retos que supone. En este sentido, trabajaremos la formación ideológica en el ecologismo, el feminismo, el republicanismo, la memoria histórica y las nuevas relaciones capital/trabajo, entre otros.

QUÉ HAY QUE CAMBIAR DE NUESTRAS NORMAS

IU se dota en sus estatutos de unos "principios rectores" que creemos necesario adaptar para corregir los defectos detectados y para que, sobre todo, estos principios tengan una aplicación concreta fácilmente realizable. Planteamos la siguiente ordenación de los principios rectores:

- Actualmente los estatutos de IU definen 12 "principios rectores" que posteriormente se van desarrollando en el articulado de los mismos. Sintetizaremos alguno de ellos para hacer más lógica y reglada la democracia participativa en la organización, modificando el primer principio rector "*principio de funcionamiento democrático y el consenso*" por uno nuevo que englobaría este y el de "*principio de elaboración colectiva*"; pasaríamos a denominarlo principio rector de "democra-

cia participativa" como un principio fundamental en lo organizativo que garantizará la máxima participación en la toma de decisiones desde el ámbito local hasta el ámbito estatal.

- Mecanismos de planificación y evaluación interna, todos los órganos deberán desarrollar los aprobado en las asambleas mediante la puesta en marcha de planes de trabajo anuales que deberán ser evaluados semestralmente. Una evaluación a mitad de año y otra más al finalizar el año que deberá servir como base para los siguientes planes de trabajo. Con este mecanismo garantizamos el ejercicio de crítica y autocrítica, evaluación permanente y rendición de cuentas. Lo importante es que la autocrítica sirva para la evaluación a todos los niveles de tal forma que la evaluación y la rendición de cuentas sean elementos básicos en el funcionamiento de la organización.
- Mecanismos de consultas a la militancia y consultas populares vinculantes garantizando siempre la máxima participación y pluralidad. Se establecerán y quedarán regulados ambos procedimientos para que la militancia pueda decidir sobre cuestiones concretas (acuerdos institucionales, posición política ante situaciones concretas). En el marco de estas consultas la confección de todas las candidaturas de IU se realizará por procesos de primarias como se han venido regulando en los últimos procesos.
- Mecanismo de rendición de cuentas de los cargos públicos: este mecanismo ya figura en los estatutos pero no se ha aplicado de forma homogénea en la organización, la rendición de cuentas seguirá siendo obligatoria de forma anual convocando asambleas abiertas al conjunto del pueblo, opcionalmente podrán ser convocadas de forma semestral y de manera extraordinaria cuando se solicite por un porcentaje de adscritos a la organización correspondiente.
- Elaboración de un código ético para cargos públicos y orgánicos
- Mecanismo de revocación de mandatos: se establecerá la posibilidad de revocar el mandato de los responsables orgánicos e institucionales.
- No se podrá ocupar simultáneamente más de un cargo orgánico ejecutivo y uno institucional.
- Es imprescindible la correcta aplicación del principio de federalidad, entendiendo que las decisiones estratégicas son compartidas y elaboradas por todas y la aplicación de la política aprobada se adaptará a cada realidad territorial pero sin que contravenga lo aprobado o genere desigualdades entre territorios. A pesar que los estatutos regulan bien el principio de federalidad haciendo compatibles las competencias de las federaciones con las federales para garantizar la necesaria coherencia y unidad de acción, sin embargo la realidad, muchas veces nos ha llevado a incumplir en la práctica lo establecido. Este ha sido un déficit de los órganos de dirección federales que no debemos permitir que siga produciéndose. Estableceremos mecanismos de control sobre los mismos por parte de la militancia u otros órganos para que siempre se asegure su cumplimiento. Por parte de las federaciones ocurre lo mismo y estas se excusan en sus estatutos, su rango (personalidad jurídica propia) o consultas a su afiliación para justificar decisiones que rompen el pacto federal por lo que es necesario también, revisar los protocolos, estatutos de federación y mecanismos de intervención que garanticen estos cumplimientos más allá de la necesaria corresponsabilidad consciente y consecuente de todas las partes con el proyecto federal.
- Mecanismos de incorporación real de las mujeres más allá de lo hasta ahora acordado para garantizar la presencia y actividad de las mujeres. Feminización de la organización y sus órganos: Espacios amables, con horarios razonables, en los que la presencia y participación de las mujeres sea algo habitual que invite a otras mujeres también a participar, frente a la organización masculinizada que tenemos ahora. Para ello es imprescindible el replantearnos las formas de "debate" o articulación de las diferentes reuniones. No es de recibo que mientras la mayoría de los hombres permanecen en los órganos mandato tras mandato sean las mujeres las renovadas. Se establecerá

un procedimiento de apremio para resolver posibles conflictos internos que afecten a mujeres por razón de su género.

- Democracia radical desde las bases: Las asambleas de base serán el espacio natural de participación de todas las personas que quieran sumarse al proyecto. Las asambleas serán soberanas en el ámbito de sus competencias y deberán reunirse aproximadamente una vez al mes. Contarán con una comisión coordinadora que cada asamblea elegirá de entre sus miembros con el objetivo de llevar a cabo las tareas más importantes de su ámbito de actuación. Estas funciones serán las que cada asamblea considere oportunas, y deberán ocuparlas las personas que realmente desarrollen ese trabajo palpable en sus asambleas, es decir responderán a la lógica de trabajo y no de equilibrios entre familias. Las asambleas elegirán uno o varios portavoces (pueden ser rotativos), que servirá para hacer de enlace con ámbitos superiores de la organización. El o la portavoz será un transmisor de la opinión de su asamblea a ámbitos superiores de decisión.
- Revisión de los Estatutos por una Asamblea Estatutaria a los dos años de celebrada la XI Asamblea que permita profundizar en el desarrollo de la IU Movimiento Político y Social
- Sintetizar los estatutos para facilitar su conocimiento y garantizar por lo tanto que la militancia los conoce y los aplica, para ello se sacarán del cuerpo de los estatutos y se convertirán en reglamentos anexos a los mismos las siguientes partes: UAR, Partidos y corrientes, Áreas y representación política institucional. Se realizará un nuevo reglamento que desarrolle las primarias y los procesos de decisión por las bases que aquí se proponen y por último se revisará y modificará el capítulo referente a los órganos de dirección en línea con lo aquí propuesto y que en la parte de asambleas de base prime más las asambleas abiertas frente a las cerradas.

Para desarrollar estos principios rectores es imprescindible la adecuación de los órganos a las necesidades del proceso de construcción del MPS. Igualmente es imprescindible la regulación de los mecanismos de participación de la organización en diferentes decisiones y del pueblo en su conjunto en otras decisiones. Se plantea por lo tanto un sistema organizativo claro que debe ser aplicado a todas las estructuras de IU desde el ámbito local hasta el ámbito federal.

Pasamos a describir el modelo organizativo asentado en la democracia participativa:

- Se aplicará en todas las estructuras la existencia de tres órganos: la asamblea dónde se produce el debate sobre las líneas estratégicas y la política a llevar a cabo entre los periodos que no haya asambleas; el órgano político que aplicará y desarrollará la política aprobada en las asambleas; y por último la coordinación ejecutiva que ejecutará las decisiones adoptadas en los órganos superiores. En las asambleas locales con poca militancia es preferible que solo existan dos órganos y se priorice la asamblea antes que el consejo político. En base a este modelo entenderemos mejor como organizar el movimiento Político y Social si lo referenciamos como un espacio que potencie y coordine el trabajo y la acción de Partidos, Corrientes de Opinión, Activistas, Redes y Colectivos Sociales, unidos en torno a un objetivo que se concreta en un programa político y en un acuerdo programático y que en un momento determinado puede tener una plasmación electoral.
- Las normas de funcionamiento de estos tres órganos tienen que regular los ámbitos de competencias del colectivo y de cada uno de sus componentes, así como la resolución de las contradicciones y conflictos que surjan. Tiene que tener una pata política compuesta por los Partidos Políticos, las corrientes de opinión política y una Pata Social compuesta por Redes, Colectivos y Activistas sociales.

– Debe tener tres niveles de dirección con unas competencias y funciones bien determinadas:
  - Nivel de Representación Territorial, Político y Social. Este nivel coordina y toma las decisiones de carácter general, lo que en el texto anterior se denomina Asamblea.
  - Nivel de elaboración y decisión sobre la coyuntura de carácter general y sobre el ámbito de competencias de cara a la política nacional
  - Nivel de ejecución y seguimiento del día a día.

En función de este esquema se plantea una propuesta:

ASAMBLEA POLÍTICO Y SOCIAL

se reunirá dos veces al año de forma ordinaria y una tercera cuando por sus competencias fuese necesario. Contaría con una mesa coordinadora compuesta por un coordinador/a, y un/a responsable de organizar el trabajo del órgano. Dos reuniones serian de carácter ordinario y la tercera tendría el carácter monográfico de debatir el balance de gestión del órgano ejecutivo a modo de asamblea de dación de cuentas. Su composición será mixta, una parte la elegida directamente (el órgano político) otra parte elegida por las federaciones, otra parte elegida por los partidos (20 personas, un cupo fijo y resto proporcional a su afiliación) y corrientes internas y otra en representación de la parte social de la organización (las áreas), sus funciones serán las siguientes:

– Convocar la Asamblea Federal; Ratificar la coordinación de la asamblea político y social a propuesta del Coordinador General; Ratificar la propuesta de Coordinador aprobada por el órgano político en su primera reunión celebrada en la propia Asamblea Federal; Aprobar los referéndum internos que proponga el órgano político; Aprobar la incorporación de nuevos miembros, en función de los protocolos que se acuerden con nuevos colectivos que se incorporen; Aprobar los planes de trabajo ejecutivos; Ratificar el programa electoral elaborado por el órgano político; Ratificar el Candidato/a a Pte. Del Gobierno en función del método de elección que determina los estatutos; Promover revocatorios de cargos orgánicos e institucionales de ámbito federal y europeo en las condiciones que determinen los estatutos.

ÓRGANO POLÍTICO

se reunirá cada 45 días, 8 veces al año, compuesto por la parte de elección directa y un representante por federación, (la/el coordinadora/or o quien designe la federación de manera estable) y dos representantes de los partidos que sean miembros de IU; sus funciones son:

– Representación legal y política; Aprobar en su primera sesión a celebrar en la Asamblea Federal al Coordinador/a General y plantearlo para su ratificación al órgano político y social; Constatar que los pactos pre y post electorales autonómicos están sujetos a la federalidad y mantienen la coherencia política de este proyecto, por encima de cualquier consideración jurídica; Proponer al órgano político y social las candidaturas al Parlamento Europeo y del Congreso; Coordinar la elaboración del programa electoral de ámbito federal y europeo; Dirigir la política española e internacional y adoptar cuantas resoluciones sean necesarias, con carácter vinculante para el conjunto de la organización; Aprobar los acuerdos post-electorales de ámbito estatal; Ratificar la propuesta del órgano ejecutivo a propuesta de la coordinación; Elegir una comisión de control de la UAR; Garantizar la unidad de la acción política y programática de la organización en el Conjunto del Estado.

ÓRGANO EJECUTIVO

se reunirá al menos quincenalmente, o cuando la coyuntura lo requiera, no tomara decisiones de ámbito político y cuando la urgencia requiera una decisión que no esté en sus competencias deberá ser ratificada por el órgano político en su primera reunión. Es aprobado por el órgano político a propuesta de la coordinación general, cuando el tema lo requiera podrá participar el/la Coordinador/a del órgano político y social, sus funciones son:

– Gestión cotidiana de la organización y puesta en práctica de las decisiones adoptadas por los órganos superiores; Elaborar y desarrollar los planes de trabajo aprobados por los órganos superiores; Plantear debates monográficos; Elaborar un informe periódico a los órganos superiores cada vez que se reúnan; Para cualquier otra competencia tendrán que tener una delegación expresa y temporal del órgano competente.

LA ORGANIZACIÓN EN EL CONFLICTO SOCIAL Y SU COMUNICACIÓN

Continuando el desarrollo del principio de democracia participativa, IU se dotará de dos herramientas esenciales para la consecución de este objetivo: las áreas de elaboración colectiva y las asambleas locales y sectoriales.

1. **Áreas de elaboración colectiva.** En la actualidad las áreas son de elaboración programática, colectiva y participativa, pero no son impulsoras de apoyos a conflictos sectoriales. Es imprescindible que las áreas sirvan también para este fin dado que aglutinan a activistas de cada ámbito y por lo tanto conocen de primera mano el origen y las causas de los conflictos. La elaboración colectiva, como proceso de participación activa, analiza la realidad, propone alternativas y diseña movilizaciones para abordar respuestas a los problemas detectados con los actores implicados. Es decir, la elaboración colectiva nace, necesariamente, vinculada a movimientos sociales, sindicales, profesionales, etc. y, por ende, superador de la propia organización, abriendo nuevos marcos de trabajo incluso electoral con otras fuerzas, políticas o no.

   Las áreas, por tanto, han de ser espacios multidisciplinares y abiertos a la sociedad, no exclusivamente militantes. Asimismo, ha de trabajarse desde la base del consenso y la autorreglamentación interna, sin que eso signifique que haya determinados criterios que hayan de cumplirse por parte de todas las áreas.

   Para garantizar que el trabajo de las áreas sea fructífero y las personas que en ellas se involucran sean conscientes de su utilidad, el modelo organizativo de IU ha de recoger la necesaria vinculación institución-dirección política-áreas-asambleas, dando la necesaria difusión a las propuestas programáticas y movilizaciones para que sean herramientas útiles.

   Como alguna medida indispensable para la consecución de este objetivo debemos recoger la participación en los órganos, especialmente en lo que se refiere a la introducción de puntos del orden del día, la rendición de cuentas y evaluación de los trabajos desempeñados por las áreas para garantizar el cumplimiento de los objetivos, establecer mecanismos flexibles para conocer y contribuir a las políticas institucionales y el establecimiento de mecanismos de resolución de

conflictos en caso de propuestas contradictorias por parte de áreas distintas, asambleas sectoriales o territoriales.

El propio espíritu con el que nacen las áreas hace que haya que flexibilizar la estructura y el modelo organizativo. A pesar de tener que contar con una coordinación suficiente y un mínimo control sobre el número y las competencias, ha de dejar margen suficiente para poder articularse en el territorio de la manera más eficaz. Y resolver la participación de sus miembros, que pueden ser o no militantes de la organización, en la toma de decisiones programáticas. Estableciendo cauces de participación suficientes para resolver propuestas políticas que puedan ser especialmente sensibles.

Más allá del grado de autoorganización de las áreas se recomienda que las mismas recojan en su seno dos realidades organizadas que deben ser útiles para la participación de la militancia: las redes de activistas y los foros de debate y elaboración. Las áreas deben transitar hacia un modelo organizativo más flexible, orientado al fortalecimiento del nuevo movimiento anticapitalista. Las áreas son la mejor herramienta para avanzar en la construcción de ese espacio volcado en el conflicto, la movilización y la tensión social.

2. **Asambleas locales y sectoriales.** Las asambleas viven los conflictos locales en primera línea e inciden sobre su realidad local, por lo tanto han de ser actores fundamentales en la implicación en los conflictos y la traslación de sus demandas al ámbito institucional y social.

   La redefinición del modelo organizativo tiene una repercusión directa sobre la prioridad de intervención en los conflictos al generar una organización menos interiorizada y más volcada en el conflicto y en su realidad territorial o sectorial.

   Debemos recuperar la tarea de construir instituciones sociales que tengan y practiquen en su seno los principios y valores que queremos que sean dominantes, en vez de ofrecer la espera a una victoria electoral que se antoja lejana.

   De hecho, parte de nuestros problemas para hacernos entender tienen que ver con esa ausencia de referencias en la vida concreta que permitan atisbar una sociedad nueva. La hegemonía cultural del neoliberalismo es rotunda no solamente por una victoria ideológica, sino porque esta se apoya en una práctica concreta, cotidiana y evidente del individualismo o el consumismo. No se concibe otra vida al margen de eso. Por el contrario, hay valores morales de la izquierda, como la secularización de la sociedad o la tolerancia hacia la diversidad sexual o racial, que sí avanzan, aunque sea de forma lenta y con reacciones adversas, apoyados en la práctica social cotidiana.

   No se trata, en resumen, de entender la presencia en el conflicto como mera labor de agitación y de respaldo de causas justas, sino como construcción de poder popular, de nuevos vínculos humanos, de relaciones sociales menos mercantilizadas y más solidarias. Es en estos conflictos desde donde emerge la conciencia de clase, y con ella el poder popular.

Hace falta, por tanto, cambiar nuestra forma de organizarnos y de comunicar, para hacer saltar los consensos básicos del neoliberalismo, socavar su legitimidad, mostrar que sus instituciones no funcionan y presentar a la sociedad nuevas alternativas. Partimos de estas premisas:

– Hace falta, por tanto, cambiar nuestra forma de organizarnos y de comunicar, para hacer saltar los consensos básicos del neoliberalismo, socavar su legitimidad, mostrar que sus instituciones no funcionan y presentar a la sociedad nuevas alternativas. Partimos de cuatro premisas:

- Daremos un carácter central y estratégico al refuerzo y puesta en marcha de experiencias alternativas de consumo, producción, creación cultural, etc.
- Reorganizaremos nuestras estructuras para orientarlas a la construcción de ese tejido social y dotarlas de perspectiva estratégica.
- Insertaremos cada acción política dentro de una estrategia para reforzar un movimiento más amplio, orientado a abrir un escenario de cambio real. Es decir, resaltar el valor instrumental del plano electoral e institucional y también evitar perder la mirada a largo plazo cuando trabajamos en lo social.

Todo ello exige la toma de medidas concretas.

En lo organizativo, ya apuntado, volcaremos las estructuras de base hacia el activismo y la creación de tejido social. No se trata de suplantar a los colectivos sociales, sino de complementar, reforzar y colaborar en la coordinación de los distintos ámbitos.

Dirigiremos todo nuestro potencial militante hacia el conflicto. Giraremos la organización desde la institución hacia las luchas concretas y la creación de redes y comunidad, y organizaremos nuestro trabajo y prioridades políticas en función de eso. Somos miles de personas, con un proyecto estratégico de nuevo país, que intervenimos de manera directa para mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría trabajadora. Repensemos nuestra forma concreta de organización:

- Para organizar bien a nuestra militancia, simpatizantes y comunidad necesitamos una base de datos bien segmentada, que sea útil para el trabajo de las asambleas de base, las redes de activistas y los foros de debate, como para organizar el activismo digital.
- IU debe preguntarse por qué las mujeres intervienen tan poco en las asambleas. Por otra parte, el modelo de debate y turnos de intervención, se presta más al contraste de opiniones contrapuestas que a la aportación cooperativa para conseguir buenas ideas. Y en ese modelo, las mujeres no nos sentimos cómodas.
- Las asambleas territoriales deberán realizar un análisis de los conflictos en marcha en su entorno y de las experiencias alternativas activas, valorando cuáles de ellas es necesario reforzar o qué nuevos ámbitos de trabajo sería necesario abordar. No debemos centrarnos tanto en aquellas luchas o problemas concretos que alcanzan una gran intensidad puntual, sino más bien en generar o reforzar instituciones comunitarias sólidas que puedan perdurar.
- En esta línea, las asambleas y las federaciones no pueden ser compartimentos estancos que se ciñan a su territorio. Se debe fomentar el contacto y coordinación entre distintas asambleas y federaciones, facilitando el trabajo cooperativo que multiplica su impacto y sus resultados.
- Debemos apostar especialmente por aquellas experiencias que no se limiten a demandar cambios a las instituciones sino que apuestan por la auto-organización para lograr el disfrute efectivo de derechos: a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación, etc.
- Para ello, se articularán redes de activistas, ya sea para ámbitos generales de intervención o bien para luchas o proyectos concretos. Se priorizarán la luchas feminista y ecologista y las vinculadas al conflicto capital-trabajo.
- Se introducirán mecanismos para la organización del trabajo, que permitan crear equipos multidisciplinares en cada área. Cualquier organización humana debe estudiar los métodos y procesos para mejorar su eficacia.
- Combinar las formas clásicas de participación para nuestra militancia que sufre de la brecha digital, con la dinamización de la comunidad digital y comunicacional.

– Volcar las estructuras de base hacia el activismo y la creación de tejido social. No se trata de suplantar a los colectivos sociales y sindicales, sino de complementar, reforzar y colaborar en la coordinación de los distintos ámbitos.

Por su parte, la comunicación ha de tener un papel central en nuestro modelo organizativo. Hacemos política para interactuar con la gente y, por tanto, la actividad de consumo interno debe reducirse al mínimo imprescindible. Pero, además, no podemos concebir la comunicación como el momento final del proceso político, como una mera venta de un producto ya terminado, sino que debe formar parte del proceso de toma de decisiones políticas. Una posición política cargada de razón puede resultar absolutamente inútil si no se planifica cómo transmitirla, en primer lugar, al conjunto de la organización, y después a la sociedad.

Esta cultura de la comunicación exige poner en un lugar central la planificación estratégica del discurso. La política de una organización no puede ser una suma de decisiones aisladas que simplemente se enuncian, sino que deben percibirse como un conjunto coherente de ideas y acciones que buscan generar un resultado y que tienen continuidad. Hemos de concebir la política como un proceso.

Algunas de las tareas a desarrollar serían:

– La formación en comunicación, proyectando una imagen plural, feminizada y renovada. Pero no sólo comunicaremos lo que hacemos en IU sino también lo que hacen los activistas fuera de IU.
– La elaboración constante de argumentarios y resúmenes sencillos sobre las cuestiones clave para compartirlos con el conjunto de la organización y la mejora de los sistemas de comunicación interna, para que esta sea estable y ágil, permitiendo una comunicación más fluida entre las distintas estructuras. Al mismo tiempo dotaremos de herramientas y formación a nuestras asambleas de base y activistas para que comuniquen a la sociedad sin intermediarios.
– La planificación estratégica de campañas de movilización y la implementación de herramientas colaborativas para la organización de activistas y para el desarrollo de tareas de elaboración teórica.
– La vinculación entre análisis sociológico y comunicación política;
– Utilizar un lenguaje para la mayoría. Debemos ser capaces de adecuar a la realidad española del siglo XXI nuestras ideas, nuestras palabras, los conceptos con las que la izquierda ha explicado su mensaje y se ha dirigido a la clase trabajadora. Una estrategia discursiva propia, que conecte y traduzca políticamente la frustración e indignación, al servicio de la conquista de la hegemonía cultural.

MODELO DE ESTADO

Nuestro modelo de Estado forma parte integral del proceso constituyente que queremos impulsar y que tiene en su desarrollo dos ejes directores: la perspectiva nacional y la de clase. Defendemos alianzas de clase entre las clases populares y trabajadoras del conjunto de pueblos del Estado para impulsar y hacer realidad un proceso constituyente que nos permita construir un Estado, una República, que defienda y defienda a la mayoría social trabajadora.

Por lo tanto, la República, el pacto federal, el reconocimiento efectivo del derecho de autodeterminación, la lucha contra el patriarcado, la democracia participativa, la justicia social y el laicismo son las

bóvedas que levantan una nueva arquitectura política y social favorable a la mayoría social trabajadora y constituyen el compendio de nuestra propuesta de Estado.

En este sentido, la propuesta de Estado federal de IU se fundamenta en la doble voluntad de los pueblos de España de alcanzar un mayor autogobierno como unidades federadas dentro del nuevo Estado y en las potencialidades del Gobierno conjunto que harán realidad como partes integrantes de la "Federación". Se propone por tanto un modelo basado en la cooperación horizontal, en red, tejiendo una malla de solidaridad que permita una distribución homogénea del poder, superando la visión subordinada Administración central-Administración periférica.

Nuestra propuesta de Estado federal, plurinacional, multicultural, plurilingüístico, cooperativo y solidario debe basarse en el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión a la forma política resultante de la creación del Estado federal. El hecho de pertenecer a una Nación, nacionalidad o región, no implica, de facto, la existencia de límites a la voluntad federalista y al contenido de esa voluntad.

El Estado federal propugnado no perjudicará en base a privilegios o trato discriminatorio los intereses de la mayoría social en su conjunto, ni de unos Estados respecto a otros. Los Estados podrán acceder a un mismo grado de autogobierno, por la voluntaria decisión que cada uno de ellos adopte. Al mismo tiempo, imposibilitará que se produzcan involuciones en materia de derechos y libertades en ninguna de las unidades federadas.

Para IU la defensa de un modelo de Estado federal, plurinacional, cooperativo y solidario se basa en la convicción que es la fórmula que puede dar solución a los problemas políticos derivados de la realidad plurinacional, de forma que el Estado asuma lo diversificado de su composición, garantizando los reequilibrios territoriales entre los diferentes territorios y los diversos actores sociales. Un Estado que, contando con un bloque bien definido de competencias propias y con suficiencia financiera, haga efectivos los principios de igualdad, solidaridad y progreso.

Por todo ello, el modelo de Estado que propugnamos se debe fundamentar con un pacto entre las distintas unidades federadas como expresión de la soberanía de los distintos pueblos. Así pues el Estado Federal debe garantizar la soberanía política de las distintas unidades federadas para decidir su futuro, al tiempo que garantiza también la concreción del resto de soberanías: la energética, alimentaria, urbanista, educacional, sanitaria, etc.

Además, toda nuestra presencia institucional debe estar volcada en el cumplimiento de la estrategia política de este documento, a fin de ser un instrumento útil a las clases populares. Nuestra larga tradición municipalista ha demostrado que tenemos una fuerza más que notable en ese ámbito, siendo referencia de las clases populares locales y ejemplo de compromiso político y moral en el objetivo de construir una república federal, socialista, ecologista y feminista y laica.

EUROPA

La Unión Europea realmente existente no es una articulación solidaria de las economías nacionales, ni menos aún la construcción de una Europa social, sino más bien un tablero de juego que han diseñado los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en todo el mundo. En particular han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso de construcción europea, diseñando una arquitectura institucional que ha combinado la globalización financiera y productiva con el acantonamiento de la política fiscal y laboral.

La actual crisis ha puesto al desnudo la cara oculta del proyecto europeo. Pero además, el ejemplo griego ha certificado que la Unión Europea es irreformable e incompatible con la soberanía de los pueblos y con cualquier tipo de política social transformadora. Las estructuras de la UE están diseñadas por y para los intereses del capital financiero, y su integración en la OTAN la convierte en un aliado del imperialismo que hoy intenta someter a los pueblos de todo el planeta para apoderarse de los recursos naturales e imponer políticas regresivas y antipopulares.

En este marco la burguesía española ha preferido ser periférica y construir una economía dependiente a los intereses del capital alemán. Las consecuencias prácticas de nuestra integración en la Unión Europea han sido el desmantelamiento de la industria, la agricultura, pesca y ganadería y la reconversión de nuestro tejido productivo en una economía orientada hacia el sector servicios.

La moneda común, el euro, es un instrumento más en el engranaje de dominación de los poderes económicos que conforman el entramado de poder del capitalismo financiero mundial. Ahora bien, décadas de bombardeo ideológico por parte de todos los medios del sistema y la posición timorata, cuando no cómplice, de gran parte de la izquierda europea, han llevado a las capas populares a la percepción de que la Unión Europea es la garantía del bienestar pasado, presente y futuro.

Combatir el consenso ideológico del neoliberalismo no es sencillo y reducir nuestro planteamiento a una salida unilateral del euro y de la UE sin más, podría llevarnos a caer en una posición izquierdista y poco comprensible para la mayoría social. No obstante, si algo podemos afirmar es que el problema de Europa va mucho más allá de una moneda. Las crisis, las desigualdades que existen entre los distintos territorios de la UE y, sobre todo, entre las clases sociales, no nacen con la moneda única sino que son inherentes al capitalismo.

Nuestra labor debe tener una importante carga pedagógica, ya que es necesario que expliquemos a las capas populares lo que supone pertenecer a la Unión Europea y a la moneda común. En este sentido es necesario que asumamos que debemos llevar a las instituciones europeas al máximo de las contradicciones que estas permitan, con un programa de gobierno que confronte de manera incontestable con las políticas de austeridad que dicta la troika. Al mismo tiempo debemos ayudar a la coordinación de los sindicatos europeos, a fin de luchar contra la competencia brutal a la baja que se da en el ámbito laboral en materia de derechos y salarios.

Para empezar reafirmamos nuestra propuesta de auditoría de la deuda, negarnos a pagar la deuda ilegítima y reclamar instrumentos de soberanía económica y monetaria para hacer frente a cualquier crisis. Debemos establecer varias fases para poner al descubierto las contradicciones de la Europa del euro, partiendo de la base de que es absolutamente imprescindible que, llegado el momento, estemos dispuestas a asumir las consecuencias que una política de soberanía económica y en favor de los intereses de las clases populares pueden acarrear como la expulsión de nuestro país de la Unión Europea.

Es imprescindible trabajar junto a otros partidos y organizaciones anticapitalistas y rupturistas de la izquierda europea para realizar propuestas conjuntas y solidarias de integración económica. Tenemos un enemigo común, necesitamos una lucha común del pueblo y los pueblos europeos. Frente a la realidad actual el internacionalismo es más importante que nunca, empezando por la unidad de la lucha de los trabajadores europeos. El enemigo común, esa alianza entre las diferentes clases dominantes, la burguesía española o portuguesa o italiana, como la griega o las demás, no sólo acepta sino que comparte en lo fundamental, la política de la Troika. Así pues lo primero que debemos hacer es delimitar las líneas del frente de esa lucha y posicionarnos, no con nuestra burguesía sino con nuestra clase.

Lo que los burócratas de la UE llaman "austeridad" es en realidad una política que ha llevado a cabo una transferencia masiva de recursos sociales arrebatados a los servicios públicos para ponerlos al servicio del capital privado (el rescate de la banca privada es el mejor ejemplo), y que ha producido una gigantesca transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Estas políticas son inherentes al capitalismo en tiempo de crisis. En un momento de recesión el gran capital para mantener la tasa de ganancia, de beneficio, necesita aumentar la explotación de la clase trabajadora y los recursos naturales, necesita nuevas esferas de negocio que está consiguiendo mediante la privatización de servicios públicos. Y todo esto con unas instituciones europeas y gobiernos estatales a su servicio, al servicio de la oligarquía.

Junto a esas políticas de austeridad estamos ante una oleada de acuerdos comerciales (TTIP, TISA, CETA) que son la propuesta capitalista para su salida a la crisis. Todos ellos van más allá de meros acuerdos comerciales, se trata de establecer nuevas normas que les permitan revertir los avances sociales conseguidos por años de lucha del movimiento obrero, nuevas normas que les permitan seguir aumentando beneficios, que les permitan eliminar obstáculos para continuar privatizando servicios públicos y aumentar la explotación del planeta.

Ahora bien, las grietas que se han comenzado a atisbar en el consenso ideológico construido en torno a las veleidades de la Unión Europea, provienen de forma mayoritaria de un grito de soberanía popular frente a las políticas neocoloniales económicas que nos llegan desde Bruselas. Hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para no dejar que todo ese capital de descontento pueda ser absorbido por opciones de extrema derecha, como ha ocurrido en otros puntos de Europa.

Entre las capas populares existe, es cierto que de forma aún tímida pero también creciente, un rechazo evidente a la imposición externa de un conjunto de políticas de austeridad que no mejoran en modo alguno su nivel de vida sino que, muy al contrario, lo empeoran de forma sistemática. La crisis económica va a arreciar. Se avecinan tiempos de mayor represión, mayor pobreza y nuevos recortes. Debemos analizar la situación con inteligencia y ser capaz de organizar y orientar todo el descontento que ha surgido y surgirá hacia una salida anticapitalista, popular y progresista de esta crisis.

Es de vital importancia que entablemos relación con todas las fuerzas soberanistas de la izquierda rupturista del Estado y lleguemos a una alianza de las fuerzas populares, al margen de diferencias nacionales, para combatir la política imperialista de la Unión Europea e iniciar un proceso constituyente que trascienda el actual marco y confronte con el poder.

El objetivo es acordar un programa de gobierno, en alianza con los sectores afectados por el colonialismo económico emanado de la UE, que haga frente a las imposiciones autoritarias en materia económica y social que nos llegan desde la UE, por ello, en este momento es urgente abrir un gran debate público europeo para que los pueblos decidan qué tipo de integración regional desean y sobre qué bases políticas, económicas y sociales.

Para conseguir nuestro objetivo de garantizar a todos los europeos y europeas pan, trabajo, techo, educación, sanidad, bienestar social, esto solo puede garantizarse si los sectores estratégicos de la economía están en manos de la sociedad. Solo desde ahí podemos podremos plantear: Renta básica, reducción jornada laboral, anticipación edad jubilación, salario mínimo decente, salario máximo, derecho a la vivienda, sanidad y educación públicas universales, servicios sociales, atención a las personas con discapacidad o personas dependientes.

Evidentemente esto solo se puede conseguir si se declara una moratoria inmediata del pago de la deuda, y forzar una quita, tras una auditoria. Si no se hace el gobierno estaría incapacitado para abordar las políticas sociales que son necesarias.

INTERNACIONAL

La dramática crisis que vive la humanidad es alimentaria, energética y financiera. Es consecuencia del sistema capitalista y ha acentuado los rasgos antidemocráticos de las instituciones internacionales, el uso de la fuerza contraviniendo el derecho internacional, el retraso en los cumplimientos de los objetivos del milenio, un aumento sustancial del gasto en armamento e I+D en programas militares, y la guerra como recurso que garantice a los países dependientes de energía contar con los canales de suministro.

En esta fase bárbara y criminal del capitalismo, no sólo se agrede al bienestar de las personas en los países desarrollados haciéndonos retroceder 40 o 50 años, sino que también se multiplican las desigualdades respecto a los países empobrecidos abandonando a millones de personas al hambre, la muerte por falta de medicación y a la pobreza extrema.

En primer lugar hay que señalar responsabilidad de la UE con las causas de la migración. Las guerras promovidas por determinados estados miembros y EEUU, el empobrecimiento de determinados países por el expolio llevado a cabo por las transnacionales o el cobro de una deuda externa que sigue desangrando a los países del sur, lleva a que muchos países, principalmente del continente africano estén en una situación de pobreza y conflictos armados. Son estas guerras, el hambre y la miseria la causa de que millones de personas tengan que abandonar sus países de origen.

En segundo lugar las políticas migratorias de la UE siempre han estado supeditadas a los intereses económicos de la élite, y en demasiadas ocasiones al margen de los derechos humanos. La división entre migración regular e irregular ha permitido durante años la explotación laboral y sexual de miles de personas consideradas como “ilegales”, y se han impuesto una serie de políticas migratorias que han permitido “controlar” la entrada de migrantes dependiendo de los intereses económicos en cada momento.

Las políticas migratorias se han basado en blindar las fronteras (vallas, militarización del mediterráneo, externalización de fronteras, devoluciones en caliente) y en la criminalización y persecución de los que han conseguido entrar en la Europa fortaleza (redadas, CIEs, deportaciones, negación del derecho de ciudadanía, exclusión de los servicios públicos...).

El ataque a los derechos humanos se extiende también hacia aquellas personas migrantes que según la Convención de Ginebra deberían gozar de protección internacional, las personas refugiadas. Sólo un cambio radical de las actuales políticas económicas y políticas exteriores de la UE podría llevar a que millones de personas no se vean forzadas a abandonar sus hogares.

Desde Izquierda Unida seguimos defendiendo unas políticas migratorias basadas en el respeto a los derechos humanos. Seguimos defendiendo que ninguna persona es ilegal, el cierre de los CIEs, la apertura de vías legales para entrar en Europa, el respeto a la Convención de Ginebra, el fin de las deportaciones...

TTIP

Nos oponemos al Tratado Transatlántico de comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) por:

- Falta de transparencia en las negociaciones. Los principales textos de la negociación permanecen ocultos a la ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su publicación en 30 años. Tan solo algunos de ellos pueden ser consultados por eurodiputados, bajo unas condiciones muy estrictas y con cláusula de confidencialidad.
- Pérdida de empleos. Hay estudios que predicen hasta 600000 empleos perdidos debido al TTIP. La propia Comisión Europea, cuyo discurso gira en torno a la creación de empleo, reconoce que algunos sectores (metalurgia, madera y papel, comunicación, agricultura y ganadería, transporte o electrónica) tendrían pérdidas de empleo. Un tratado similar, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EEUU y Canadá, donde se preveía la creación masiva de puestos de trabajo, conllevó una pérdida neta de un millón de empleos.
- Aumento de las privatizaciones. Una consecuencia derivada de los tratados comerciales es la privatización de servicios. Todo apunta a que en este caso se realizará una lista negativa, en la que se explicitará todo aquello no privatizable, dejando el resto de servicios (incluidos los que se creen en el futuro) sujeto a privatización. Incluso servicios de esa lista, como sanidad o educación, pueden ser disgregados (ambulancias, comedores, gestión hospitalaria y educativa, etc.) y privatizados. Esto supone la implantación del lucro en los servicios públicos y la precarización de las clases populares.
- Pérdida de derechos sociales, laborales y ambientales. La equiparación de las normativas a ambos lados del Atlántico podría derivar en una rebaja de los estándares sociales y ambientales, al tomar como referente la legislación más laxa de cada zona, como han solicitado las grandes empresas. Así EEUU tiene, por lo general, peores estándares ambientales y laborales que la UE.
- Mayor control de la ciudadanía. Otro de los aspectos que se debatirá en el TTIP es el cibercontrol de las personas. En EEUU está permitido el control de los movimientos de las personas en internet. Estos datos pueden ser utilizados tanto para labores de vigilancia de la población como con fines comerciales.
- Degradación de la democracia. En las negociaciones del acuerdo transatlántico se está viendo la posibilidad de incluir un capítulo de protección de las inversiones, con el que los inversores extranjeros podrían desafiar legalmente en tribunales internacionales privados poco transparentes las políticas públicas ambientales, sociales o de protección de la salud, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales

SOLIDARIDAD

El balance de las políticas exteriores de la UE, no puede ser más negativo. Las Guerras de Iraq, Afganistán, Siria o Libia, no sólo no han conseguido "pacificar" esas zonas geoestratégicas, muy al contrario han aumentado la inseguridad y el aumento exponencial de la presencia de fuerzas del

yihadismo radical y la presencia del llamado Estado Islámico o Daesh, por ello no se puede demorar por más tiempo la construcción de un Sistema de Seguridad Alternativo, sin OTAN y sin Bases Norteamericanas. Las condiciones en las que el imperialismo intenta consolidar su dominación han cambiado sustancialmente, sin por ello rebajar sus objetivos, con el surgimiento del yihaidismo terrorista, el crecimiento del poder económico y militar de países emergentes como Rusia y China y las experiencias liberadoras de algunos países de América Latina, como Venezuela, Ecuador y Bolivia. En concreto, el imperialismo estadounidense está dando prioridad a sus intereses económicos en la región Asia-Pacífico, lo que no significa la desaparición de las contradicciones inter imperialistas y la pugna por las materias primas y los recursos naturales básicos, como el petróleo y el agua, sólo su desplazamiento geográfico.

LAS NUEVAS AMENAZAS DEL IMPERIALISMO

Es imposible defender las ideas y los valores de la izquierda sin ejercer y practicar una visión internacionalista en la lucha por el Socialismo que ponga fin a la barbarie organizada del capitalismo. Tanto los pueblos que han conseguido derrotar a la barbarie, como los que la sufren cuentan con nuestro apoyo internacionalista. Queremos avanzar en trenzar agendas comunes con sus organizaciones políticas y sociales. En América Latina y Caribe seguiremos denunciado las permanentes agresiones de la derecha europea y norteamericana a los procesos revolucionarios iniciados democráticamente que persiguen la integración regional combatiendo las políticas neoliberales.

En este sentido reclamamos la no injerencia extranjera en Venezuela y por lo tanto condenamos la intervención política y económica del imperialismo, con la intención de alterar la expresión soberanamente democrática de su pueblo.

El bloqueo criminal de los EEUU sobre la República de Cuba, a pesar de la denuncia de la Asamblea General de las NNUU, sigue siendo para nosotras y nosotros uno de nuestros ejes de la solidaridad internacional. Seguiremos apoyando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y la denuncia del papel del gobierno de España y la UE por su renuncia a ejercer la administración del proceso de descolonización.

Marruecos, como fuerza ocupante esté esquilmando los recursos naturales del Sáhara Occidental en contra del Derecho Internacional. No descansaremos hasta conseguir que el pueblo palestino cuente con un Estado con capital en Jerusalén con las fronteras de 1967.Las actuaciones criminales del gobierno de Israel, los continuos asentamientos, el bloqueo sobre Gaza, debe tener una respuesta contundente de la Comunidad Internacional para concluir cuanto antes el proceso de paz en Oriente Próximo.

PAZ

Desde Izquierda Unida planteamos que en el proceso de construcción de otro Proyecto Regional es imprescindible acabar con la actual política exterior y de vecindad de la UE para basarla en la paz, el desarme, la cooperación y las relaciones internacionales democratizadas.

Este momento histórico demanda un modelo de seguridad rupturista con el actualmente existente que permita alcanzar un mundo desarmado y desmilitarizado, este modelo supondrá un ahorro de miles de millones de dólares anuales susceptibles de ser empleados en cooperación al desarrollo al tiempo que permite sostener las conquistas sociales de los países desarrollados.

Hoy más que nunca las políticas de defensa deben ser decididas con la máxima participación democrática, esto es, por decisión de la representación de la soberanía nacional, consultando mediante referéndum las grandes decisiones y abriendo la posibilidad de crear órganos consultivos con participación de investigadores por la paz, ONGs, y asociaciones interesadas en la paz y el desarme.

En nuestro contexto, la Unión Europea, diseñada por y para los mercaderes, no solo no ha contribuido a avanzar en una arquitectura democrática del mundo, en un desarme progresivo, en exigir el cumplimiento del Derecho Internacional, en la exigencia del respeto a los derecho humanos, muy al contrario ha colaborado en mantener el actual desorden internacional, las desigualdades, la guerra y la desprotección a los pueblos que demandan justicia social.

Además, la OTAN amplia sus objetivos y actúa impunemente en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad y en contra del Derecho Internacional. La OTAN es una amenaza para la paz, una organización criminal al actuar en contra del Derecho Internacional. Por eso no podemos dejar de denunciar que cualquier posibilidad de desarrollo de una política de paz y solidaridad exige la disolución de la OTAN y el cierre de todas las bases norteamericanas desplegadas en el Mundo.

Asimismo denunciamos que el retraso en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio es la consecuencia lógica del sistema que necesita de la expoliación de los recursos naturales de los países empobrecidos. Con tan solo una reducción del 1% del gasto militar se podría cubrir la financiación de los objetivos, por lo que calificamos la muerte de hambre como un asesinato y nos sumamos a su idea de crear un Tribunal Internacional para sentar en el banquillo tanto a los especuladores financieros como a los del precio de alimentos.

OTRO MUNDO ES POSIBLE

En nuestra sociedad, pese al creciente nivel de marginación de amplias capas sociales, existen aún millones de personas que votan conservador, y no es sólo un problema de educación, sino también porque piensan más en lo que pueden perder cuando miran a su mundo alrededor, y no confían que las transformaciones puedan producirse. Y es que, en las sociedades desarrolladas, se ha consolidado una cultura de consumismo que tenemos que tener la valentía de denunciar, de proponer su cambio radical. Ni la ecología del planeta ni el equilibrio necesario entre sociedades puede permitir el camino de producir cada vez más bienes materiales para alimentar el consumo. ¿Imaginamos que continentes enteros consuman con el mismo despilfarro que las sociedades de capitalismo desarrollado?

Somos internacionalistas y promoveremos los derechos de todos los países a disfrutar de sus formas de vida junto con el progreso que hoy permite la técnica a cada habitante. Si tenemos en nuestros países europeos (y especialmente en España) una batalla contra la desigualdad que se manifiesta como la más evidente lacra de las políticas neoliberales, tendremos que entender lo mismo a nivel internacional.

Por eso, al denunciar la deslocalización empresarial buscando salarios de miseria, tenemos que asumir que el mundo globalizado requiere un proceso de acercamiento entre las condiciones de vida de los países de mundos cada vez hoy más separados. La cuestión es que sean los pueblos los que mejoren su situación (y eso es una batalla de ellos y nuestra) no las multinacionales que multiplican con ello sus beneficios. No estamos en modo alguno aceptando que se trate de repartir miseria, porque hay excedentes crecientes que acapara una exigua minoría y, por tanto, planteamos como fundamental la alternativa socialista. Pero también, ¿qué alternativa?

Tendremos que asumir que nuestro “nivel de vida” es en buena medida resultado de la explotación de “los otros” y que lleva a un modo de vida materialmente insostenible. Cierto que, en crisis como la actual, debemos luchar por medidas que combatan la desigualdad. Pero también tenemos que poner esas “luces largas” y tener la valentía para defender que en Europa proponemos una sociedad de menor consumo de bienes materiales. Hay muchas cosas en las que crecer, pero no ese crecimiento ilimitado que alimenta el mito capitalista. Hay otros parámetros para medir el progreso y las necesidades humanas que tenemos que proponer y poner en valor.

No es un deseo, sino una necesidad alcanzar una sociedad basada en la colaboración y la solidaridad frente a la competencia; en el aprovechamiento frente al despilfarro; en el respeto y goce de la naturaleza. Esto nos lleva a un ser humano con una concepción de la felicidad contraria a la cultura impuesta por el capital; con el derecho al tiempo, al ocio, a la libertad y a la diversidad. Esto nos lleva a una nueva escala de valores y a una nueva concepción del trabajo.